

✚ Por el Dr. Carlos Salazar Flor\_\_\_\_\_

Profesor de Derecho Internacional Público y  
Privado de la Universidad Central\_\_\_\_\_

# ✚ DERECHO CIVIL INTERNACIONAL



GUIA DE CURSO

ÁREA HISTÓRICA  
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL

---

Continuación



## CAPITULO III

### LA NACIONALIDAD

SUMARIO: 1.—Importancia de la nacionalidad en el Derecho Civil Internacional. 2.—Diferencias entre Nación y nacionalidad. 3.—Fundamento de la nacionalidad. 4.—Nacionalidad y ciudadanía. 5.—La nacionalidad y el concepto de persona. 6.—Principios fundamentales del derecho moderno. 7.—Las excepciones. 8.—Adquisición originaria de la nacionalidad: por la sangre, por el suelo y por el sistema mixto de combinación. 9.—Adquisición derivativa: por la naturalización, por el matrimonio y por los cambios de soberanía territorial. 10.—Efectos de la naturalización. 11.—Derecho de opción. 12.—Nacionalidad de los habitantes sujetos a mandato. 13.—Pérdida y readquisición de la nacionalidad. 14.—Nacionalidad de las personas jurídicas. 15.—La nacionalidad en la legislación ecuatoriana. 16.—La nacionalidad en las Conferencias Internacionales Americanas. 17.—Algunos aspectos de la nacionalidad en el derecho comparado.

1.—IMPORTANCIA DE LA NACIONALIDAD EN EL DERECHO CIVIL INTERNACIONAL.—Dedicado el Capítulo anterior a la condición de los extranjeros, corresponde ahora tratar del problema conexo de la nacionalidad. Saber quiénes se consideran nacionales es cuestión tan primordial como saber quiénes son extranjeros.

Varios autores se inclinan a estudiar la nacionalidad dentro del Derecho Internacional Público. Otros, y en número no escaso, la sustentan como materia propia del Derecho Civil Internacional. Nuestra opinión se encamina por esta



segunda tendencia en virtud de las razones que pasamos a exponer.

En el Capítulo I de esta *Guía* manifestamos que el Derecho Civil Internacional se ocupa preferentemente de las relaciones jurídicas entre particulares. Los súbditos del Estado son los que intervienen habitualmente en ellas, ya contrayendo matrimonio, celebrando contratos de otra índole, invocando una sucesión, etc. Y no siempre la integridad de esta clase de relaciones tiene como escenario una localidad sujeta a una sola soberanía política.

Al contrario, las necesidades del comercio internacional, obligan de ordinario a los individuos a escaparse más allá de las fronteras del Estado, a residir en otros territorios que no son los suyos. Esta residencia no es forzosamente neutra, porque el derecho es de requisitorias permanentes y porque no puede suponerse, ni por una aventurada hipótesis, que la persona pudiera encontrarse alguna vez fuera de la comunidad jurídica. El derecho es, pues, la característica esencial del individuo en la sociedad humana. De aquí que el fin asignado a la ciencia que nos ocupa no sea otro que el de hacer posible la garantía internacional de la persona en todos los lugares, con resultado permanente.

El Derecho Internacional Público se refiere a las relaciones entre Estados, dentro de la *magna civitas*. En este orden se puede ver claramente la interdependencia jurídica de las asociaciones políticas. Ellas celebran tratados, ejercen el derecho de legación, establecen alianzas, se declaran la guerra, etc. Estos y otros aspectos constituyen el conjunto de relaciones propias del Derecho de Gentes.

Las dos clases de relaciones son completamente distintas unas de otras, porque distintos son los sujetos que en ellas actúan: individuos y Estados. El único que tiene y debe tener nacionalidad es el individuo y, en general, el súbdito del Estado. Sería absurdo hablar de la nacionalidad de los Estados.

El Estado no tiene nacionalidad. Encuadra jurídicamente los elementos constitutivos de una nación y esto es muy distinto, porque aquéllos se confunden ordinariamente con las características de lo que se ha denominado la *patria*, como la lengua, la religión, la raza, el suelo, etc. La nacionalidad es simplemente un vínculo jurídico-político que une al individuo con el Estado, en el sentido de que aquél depende de



éste y nada más. Nacionalidad del Estado no se concibe porque ninguno depende de otro, exceptuando los casos de soberanía restringida, como el protectorado o el mandato territorial creado por el Tratado de Versalles. Esta dependencia, sin embargo, nada tiene que ver con el nexo de la nacionalidad.

El Derecho Internacional Público tiene un extenso capítulo relacionado con los individuos, desde que se reconoce que siendo la nacionalidad un vínculo contractual, el Estado, por su parte, así como demanda deberes al súbdito, debe protegerlo. El concepto de la protección ha servido a muchos tratadistas para justificar el estudio de la nacionalidad, como objetivo propio del Derecho de Gentes.

No aceptamos, sin excepciones, este modo de pensar; porque si la nacionalidad sirve al individuo con respecto al Estado, no interesa, en cambio, al Estado con respecto al Estado. Que por razones de la nacionalidad de las personas, se ponga en juego algún aspecto del Derecho Internacional Público, es cosa diferente, entendiéndose que tal aspecto puede ser una consecuencia de la protección que el Estado debe al súbdito; y el derecho de proteger nace del vínculo contractual de la nacionalidad.

Salvado este punto de vista, la nacionalidad interesa, pues, de preferencia al individuo, y es parte del contenido del Derecho Civil Internacional, como pasamos a demostrarlo.

El Estado tiene el don de ubicuidad. No puede moverse de un lugar a otro. El individuo, al contrario, no puede ser jamás sedentario. El comercio internacional le obliga a atravesar las fronteras del Estado, a movilizarse incesantemente. Unas veces puede salir con ánimo de retorno; otras, puede salir y no volver, como se observa en las emigraciones por causas económicas, o antiguamente, por causas religiosas.

¿Cuál es la consecuencia directa de esta incesante movilidad del individuo? Simplemente es la de ponerle en un medio jurídico nuevo; medio que debe darle una de las dos posibilidades: 1ª.) Facilidad para acogerse a una nueva subordinación a fin de que su vida jurídica siga siendo normal; y; 2ª.) A falta de esta solución, colocarle, al menos, en un plano de igualdad con los nacionales, para el goce de los derechos civiles.



La primera posibilidad supone la pérdida de la nacionalidad de origen y la adquisición de una nueva; y la segunda, el reconocimiento de la calidad de extranjería, con el respeto pleno a los derechos adquiridos.

Si se ha perdido la nacionalidad originaria, no hay dificultad, porque el Estado del cual anteriormente dependió el individuo se ha desligado de los compromisos contractuales que supone aquélla. Si no hay esta pérdida, el individuo mantiene su nacionalidad de origen, y es ésta la que le va a servir para condicionar, en lo sucesivo, su vida jurídica iniciada, ya por hechos anteriores (creadores de derechos) o ya, en determinados casos, por hechos posteriores a realizarse en el lugar de su residencia actual en que mantiene su calidad de extranjero.

Tanto en la doctrina como en un apreciable número de las legislaciones, el elemento que traza el sistema más compatible de la permanencia de los derechos adquiridos con la libre movilidad de la persona, así como con determinadas calidades para futuras actividades jurídicas (la capacidad, por ejemplo) no es otro que la ley nacional. No queremos decir con esto que la ley nacional sea el único elemento, porque en determinados casos y a falta de otras posibilidades, se aplica el domicilio como estatuto subsidiario.

En consecuencia, la nacionalidad no interesa al Estado en la misma medida que al individuo, sin desconocer, desde luego, que el Estado así como otras entidades semejantes del derecho público, proceden, de ordinario, como meros particulares en lo que respecta al ejercicio de los derechos privados; y entonces les son aplicables los principios generales de la ciencia que estudiamos.

Si damos por aceptada esta conclusión, tendremos que convenir en que es de imprescindible utilidad estudiar toda la materia de la nacionalidad y sus aplicaciones, o sea, saber cómo se pierde el vínculo; cómo se lo readquiere; cuándo hay ausencia de nacionalidad; cuándo concurrencia, etc.

Explicada así la importancia de esta materia, entramos en el desarrollo de cada uno de los aspectos que hemos creído oportuno considerar en este capítulo, advirtiéndolo por anticipado, que dejamos para la parte correspondiente, el análisis de los conflictos de leyes en materia de nacionalidad.



2º.— DIFERENCIAS ENTRE NACION Y NACIONALIDAD.— J. P. Niboyet, en sus *Principios de Derecho Internacional Privado*, define la nacionalidad como el *vínculo jurídico y político que relaciona a un individuo con un Estado*.

Dicho autor indica que lo esencial es no confundir el *Estado* con la *Nación*. El *Estado*, dice, es la personificación jurídica de la *Nación*, cuando ésta ha sido reconocida internacionalmente.

Este aspecto diferencial nos parece de tanta trascendencia en esta materia, que no sería posible dejar de analizarlo con algún detenimiento. Frecuentemente se confunde la *Nación* con la *nacionalidad*, el *Estado* con la *Nación*.

Hace falta, por lo mismo, elaborar un concepto preciso que permita significar únicamente el contenido jurídico de la *nacionalidad*, aparte de otras consideraciones que interesarían a determinadas ciencias, como la Sociología, la Historia y la Filosofía de la Historia.

No es otra la razón que nos obliga a investigar las diferencias entre los términos mencionados.

Si admitimos la definición de Niboyet, la nacionalidad es únicamente un vínculo jurídico-político que conexiona a un individuo con un Estado determinado. Hasta aquí no hay inconveniente alguno, aunque la palabra *nacionalidad* resulte un tanto mal empleada.

Parece también exacto que el Estado sea la personificación jurídica de la Nación, pero no aceptamos que ésta deba ser internacionalmente reconocida.

El reconocimiento que en el Derecho de Gentes ha venido valorándose como sanción de la comunidad para el ingreso a ella, y para la efectividad de las relaciones que son su contenido esencial, en ningún caso se otorga a la Nación como tal, sino al Estado que la representa. Corroboramos la existencia de Naciones que no son Estados, pero no conocemos que aquéllas sean las *personas* de la comunidad internacional. No hay Naciones reconocidas sino Estados reconocidos. Poco importa que esos Estados encarnen o no la aspiración concretada en la *teoría de las nacionalidades*. Si cumplen los requisitos establecidos por el Derecho de Gentes, serán siempre Estados, miembros del consorcio internacional.

Quizá por esta razón algunos autores crean que sería más lógica la denominación de *derecho interestatal*, antes que



*internacional*, al referirse a la finalidad que cumple el Derecho de Gentes. Efectivamente, no son relaciones entre *Naciones* las que trata de regular y regula aquél. Son relaciones entre *Estados*; y así como no toda Nación es un Estado, es, sin embargo, verdadero que hay Estados que no representan la significación jurídica de toda una Nación.

La llamada *teoría de las nacionalidades* fué, en definitiva, la sustentación del principio según el que toda Nación debía aspirar a constituirse en Estado. ¿Qué extensión podía tener este principio? Sociológicamente interesó a todas las corrientes políticas de la época. La regla se hizo tendencia; el postulado se hizo acción. Se transparentó prácticamente en las unificaciones de Italia y Alemania. Fué norma de acción interna y externa. Se quería englobar, dijéramos así, en el molde jurídico de un Estado a todos los agregados humanos que se sintieran vinculados por caracteres homogéneos de raza, lengua, religión, tradición, etc.

Estos rasgos homogéneos, clásicamente, han constituido una *Nación*, aunque en el terreno de la realidad aparezca que los factores indicados sean de escasa importancia frente a los de calidades psicológicas como la conciencia de una finalidad o la previsión de una obra a realizar.

Varias veces un ideal puede formar y ha formado una alma nacional fuertemente cohesionada y orientada, a pesar de muchos elementos heterogéneos. Si damos valor a los factores mencionados, el concepto de *Nación* se confunde con el de *Patria*. Ambos son emotivos y han inquietado en igual grado la psicología colectiva de todas las épocas.

Diverso, si se trata del Estado que evoca idea de política, noción de autoridad, de ley o de poder, si se quiere. Se puede pertenecer sucesivamente a varios Estados, pero los elementos que constituyen la *Patria* o su equivalente la *Nación*, son persistentes a través del espacio y el tiempo.

Por otro aspecto, la noción de poder y autoridad que corresponde al Estado, no actúa en la conciencia colectiva con la misma fuerza que la lengua o la religión. El hombre puede amar más la tierra en que ha nacido con toda su espiritual emotividad, y puede no amar con la misma fuerza al Gobierno que representa su Estado. El individuo puede también, en un momento dado, no querer una subordinación política cualquiera y renunciarla para acogerse a otra.



Resulta así que el Estado político no es la Patria afectiva de las multitudes. Lo que es Patria produce conmociones espontáneas, sinceras y violentas; lo que es política, inquieta superficialmente. Esta concepción externa tomada desde abajo, es eminentemente real en el campo de los hechos en que aparece objetivada la concreción social, como diría Durkeim.

Clarificados así los términos según su significación lógica, podemos apreciar que muchas dificultades se hubieran subsanado si la palabra *nacionalidad* no tuviera otra función que la de expresar la pertenencia de un individuo a un grupo humano, condicionado éste por semejanzas de lengua, de historia, de religión, etc.; grupo que para ese individuo viene a ser, en definitiva, una *Patria*, sin importarnos que tal Patria esté o no esté dentro de un Estado. La Patria sin Estado no es sino la Nación sin personificación jurídica. El pueblo judío es el caso típico.

Pero no se ha encontrado hasta hoy ningún término adecuado para denominar a la relación política del individuo con el Estado o del Estado con el individuo. Los autores se quejan de la pobreza del léxico, y hasta que se descubra el término que exprese realmente el concepto, se empleará la voz *nacionalidad* para denominar la relación de un individuo con respecto a un Estado, vínculo jurídico contractual que puede renunciarse, readquirirse o modificarse a voluntad, desde que ha sido originariamente determinado por la autoridad de la ley.

En definitiva, y según la acepción anterior, la nacionalidad no es la Patria, ni la Nación, ni el Estado. Es únicamente un nexo de carácter contractual cuyo fundamento y reglas determinamos en los párrafos que siguen.

3º.—FUNDAMENTO DE LA NACIONALIDAD.—¿Cuál es el fundamento de este vínculo jurídico contractual que une al individuo con el Estado y que se llama nacionalidad?

El fundamento ha estado en relación directa con las ideas dominantes en los diversos períodos de la evolución humana, o si se quiere, con las preocupaciones de cada época,



pudiendo afirmarse que el fundamento ha ido variando a medida que se han eliminado dichas preocupaciones e ideas.

El hecho más revelador para conocer con precisión las variantes en cuanto al fundamento de la nacionalidad, ha sido el fenómeno migratorio, que se descompone en emigración e inmigración. Emigración, para el Estado que pierde súbditos, inmigración, para el Estado que los recibe y los acoge, dentro de una mayor o menor protección, según las necesidades que cumple el fenómeno dentro de cada agrupación política.

Si el derecho moderno reconoce la libertad de emigrar, como consecuencia directa de la libre voluntad para elegir una nacionalidad que más convenga a las exigencias morales y materiales de la vida, cabe, sin embargo, afirmar que no en todos los tiempos se ha reconocido una libertad semejante. Y el criterio que ha prevalecido al respecto, supone el fundamento mismo asignado a la nacionalidad en cada una de las épocas.

Los sistemas en esta materia los exponemos sintéticamente, basándonos en las conclusiones valiosas a que llega Estanislao Zeballos en su obra *La Nationalité*.

La emigración, dice el autor citado, supone el establecimiento permanente del emigrante, su radicación jurídica en el domicilio de la nueva soberanía que ha escogido. El abandono de una soberanía y la incorporación a otra, da lugar al fenómeno contrario de la inmigración. Todo esto supone, en general, la libre expatriación reconocida en los tiempos modernos. Desde luego, es necesario explicar que no toda emigración es una expatriación o sea un cambio de nacionalidad, porque puede tratarse de una salida definitiva o de una salida momentánea.

Por esto, en el Derecho de Gentes, se ha creído oportuno definir al emigrante como el individuo que abandona el país de origen, sin ánimo de retorno. La emigración sin este ánimo, produce como resultado lógico, la desnacionalización del individuo. Pero el fenómeno migratorio en sí mismo ha experimentado la influencia del Derecho Político y del Derecho Privado de cada época.

Conforme a este punto de vista podemos decir que se han presentado en el desenvolvimiento histórico, dos sistemas principales acerca del fundamento de la nacionalidad, que son los siguientes:



1º. Sistema de la sujeción perpetua del individuo al Estado; y

2º. Sistema moderno de la libre expatriación y de la desnacionalización.

El primero corresponde a tiempos pasados que se inspiraron en la autoridad absoluta del Estado. Consideró la nacionalidad como un sello indeleble, probablemente confundiéndola con la noción de *Patria*. De un modo especial, se fortaleció con la concepción feudalista que hizo del hombre mero accesorio del suelo, vinculado perpetuamente al vasallaje y a la soberanía territorial del señorío.

Según este sistema, la nacionalidad tuvo como fundamento el autocratismo del Estado y el hecho condicionante de la sangre y del suelo. La nacionalidad, pues, no podía perderse ni estaba en la voluntad del individuo el renunciarla. Se mantuvo la tradición en el derecho inglés, justificándose por la fórmula: *quién es una vez nacional de un Estado, lo es para siempre*.

El segundo sistema, al reconocer la libre expatriación y al admitir que el individuo puede libremente escoger la nacionalidad que más le convenga, transparenta el espíritu liberal del derecho moderno.

Este sistema aporta un nuevo fundamento a la nacionalidad, ya que según él este vínculo no puede justificarse sino por un contrato sinalagmático entre el Estado y los particulares, manifestándose la voluntad del primero, por medio de sus leyes y la de los últimos, de un modo expreso o tácito: expreso, por la naturalización; tácito, por la sumisión espontánea a la acción normal de la ley, aceptando todas sus consecuencias.

Descartado el fundamento de la sujeción absoluta, las legislaciones, reconociendo la libertad de emigrar, han procurado establecer ciertas condiciones para asegurar el efecto de la desnacionalización.

Desde este punto de vista se pueden anotar los siguientes sistemas:

a) *Feudal evolutivo*, que mantuvo como regla general la prohibición de emigrar, admitiendo, como excepción, una libertad limitada. Siguió este sistema la antigua Austria-Hungría, Francia y Gran Bretaña;



b) *Germánico*, que reconoció la libertad de cambiar la nacionalidad, en virtud del derecho de emigrar, mediante la previa autorización del Estado. Siguieron este sistema, Alemania Dinamarca y Finlandia;

c) *Italiano*, que reconoció, igualmente, la libertad de emigrar pero acompañada de la renuncia previa de la nacionalidad de origen. Tuvo su expresión en la legislación italiana, cuyo nombre ha tomado el sistema;

d) *Servio*, que reconoció la misma libertad, con dos condiciones: autorización del Gobierno y promesa formal de naturalización en otro país; y

e) *Español*, que mantuvo la libertad sin restricciones de ninguna clase y que fué seguido por España, Portugal, Bélgica y los Países Bajos.

Podríamos decir que los sistemas mencionados concretan todas las condiciones que los diferentes países han puesto en práctica dentro de sus legislaciones, acogiendo el sistema moderno de la nacionalidad fundada en la existencia de un contrato sinalagmático entre el Estado y los particulares. Esas legislaciones se han preocupado de asegurar la desnacionalización, para evitar los conflictos que pueden presentarse por la coexistencia de nacionalidades que, como lo indicaremos posteriormente, produce serios inconvenientes, tanto desde el punto de vista de los derechos privados como de aquellos otros que el Estado puede invocar con respecto a sus nacionales y cuyo vínculo se reputa no haberse perdido, cuando la ley no determina los requisitos a cumplirse para perder la nacionalidad de origen y adquirir una nueva.

La necesidad de las leyes de asegurar el efecto de la desnacionalización es muy importante sobre todo en América, continente al cual se dirigen apreciables corrientes emigratorias, de las cuales, las principales han procedido de Italia, Alemania, Rusia, Inglaterra y España.

Las corrientes emigratorias procedentes de Alemania, se han dirigido de preferencia a los Estados Unidos. Las de Italia, también a Norteamérica, al Brasil y a la República Argentina; y las de España a la Argentina y al Uruguay.

Reconocida, pues, de manera indudable por las legislaciones y por la doctrina, la libertad del individuo para cambiar de nacionalidad, es indiscutible que el fundamento de



este vínculo se encuentra en el contrato sinalagmático, por las razones que quedan explicadas.

4.—NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA.—No pocos autores han confundido dos conceptos sustancialmente diferentes como son la *ciudadanía* y la *nacionalidad*. Y no solamente los autores, sino también algunas Constituciones americanas han incurrido en igual error, cuando afirman que son ciudadanos los nacidos en el territorio del Estado. Como veremos más adelante, el nacimiento o la sangre son medios de adquisición originaria de la nacionalidad. La ciudadanía tiene una finalidad diversa. Responde a otro orden de ideas y está condicionada esencialmente por el derecho público interno.

Alcorta en su *Curso de Derecho Internacional Privado*, dice lo que sigue, refiriéndose a este aspecto: «La nacionalidad y la ciudadanía no son idénticas en el tecnicismo científico, por más que algunas veces se confundan. La nacionalidad es el carácter que adquiere una persona por el hecho de pertenecer a una agrupación determinada, y la ciudadanía, es el carácter especial que adquiere el que teniendo una nacionalidad disfruta de ciertos derechos en virtud de los cuales tiene intervención directa en la potestad política».

Moreno Quintana, igualmente, anota la distinción cuando en su obra *El Sistema Internacional Americano*, dice: «No importa que algunas Constituciones digan que se pierde o se recobra la ciudadanía o el ejercicio de la ciudadanía si en realidad, de la aplicación de los preceptos del caso, lo que se recobra o se pierde es la nacionalidad. A la inversa ocurre, y el caso es más frecuente, cuando las Constituciones declaran la caducidad de la nacionalidad, y de la efectividad de la sanción resulta tan sólo la pérdida de los derechos políticos. Lo esencial en esta materia no es tanto el estudio de las semejanzas y de las diferencias que surgen de la comparación de las Constituciones, como precisar el alcance doctrinario de tales preceptos».

Bastan las dos opiniones citadas para concluir que es indispensable distinguir en la doctrina la nacionalidad de la ciudadanía.



Como dejamos dicho, la primera no es sino un vínculo jurídico-político contractual entre el individuo y el Estado, que produce obligaciones y derechos recíprocos. Es nacional la persona, cuando se ha sometido voluntaria y contractualmente a un Estado determinado (salvando los casos de nacionalidad originaria impositiva, en que la ley del Estado deriva necesariamente la nacionalidad, del *jus sanguinis* y del *jus soli*). Por ese sometimiento, se puede precisar en el Derecho Civil Internacional el alcance de la ley nacional y definir un *estatuto* de aplicación, delimitándose así un orden jurídico propio y circunscrito, en cada caso.

La ciudadanía es cosa enteramente distinta y extraña a la ciencia que estudiamos. Si hacemos mención de esta calidad de las personas no es porque pertenezca al programa de nuestro estudio. Es simplemente por la necesidad de diferenciar dos aspectos sujetos a confusión, y para encuadrar cada uno de ellos, dentro del orden que jurídica y lógicamente les corresponda. Y aún más, queremos, sobre todo, esclarecer términos que necesitan estricta conceptualización en la dialéctica jurídica.

¿Qué es la ciudadanía? La ciudadanía es sencillamente una calidad especial que corresponde a los *nacionales*, que se encuentran en presencia de ciertos requisitos que les habilitan para ejercer derechos políticos. Las leyes que reglamentan la ciudadanía y los requisitos necesarios para el ejercicio de los derechos que de ella se desprenden, son leyes de derecho público interno. Ahora bien, si la ciudadanía es calidad del nacional de un Estado, estaría por demás decir que no hay ciudadanía sin nacionalidad. Y al contrario, existe nacionalidad sin ciudadanía, como la que tiene el menor de edad nacido en el Ecuador, o el mayor, que no sabe leer ni escribir.

Una de las causas por la que se ha operado la confusión entre los conceptos de nacionalidad y ciudadanía, ha sido la de que siendo la nacionalidad vínculo del individuo con el Estado, y suponiendo este último el concepto de *lo político*, es lo mismo, se ha dicho, que *ciudadanía*, porque ésta no es sino el ejercicio de *derechos políticos*. Aquí aparece de manifiesto el error porque, precisamente, la nacionalidad existe sin ciudadanía. La Nacionalidad no es sólo la ciudadanía. Es algo más. Es el título de dependencia contractual del individuo. Es la protección del Estado. Es la tutela del Estado y el amparo de la ley en lo interno y en lo internacional.



La nacionalidad, en consecuencia, y en lo que se refiere al Derecho Internacional es sustancialmente diversa de la ciudadanía. Esta se virtualiza en el orden interno de un país. No tiene alcance espacial, no puede dar lugar a conflictos, no corresponde a los extranjeros, y es por esto, extraña a nuestra materia.

Analizada la diferencia y reivindicada la amplitud de la nacionalidad, no tenemos para qué volver a tratar de la ciudadanía. Si élla se adquiere, se pierde, se suspende o se recupera, estará siempre dentro del derecho interno. No se nos ocurre caso alguno en el cual la ciudadanía pudiera desempeñar papel importante dentro del Derecho Civil Internacional.

5.—LA NACIONALIDAD Y EL CONCEPTO DE PERSONA.— Dentro de la materia de la que nos venimos ocupando, se nos presenta un problema que es necesario abordarlo con precisión.

¿Se trata aquí de la nacionalidad de las personas tomadas éstas en su acepción jurídica integral, dentro de la doble distinción de naturales y morales o jurídicas? ¿O se trata únicamente de la nacionalidad de los individuos?

He aquí un punto importante relacionado con el Derecho Civil Internacional. Nos encontramos ante la necesidad de resolver si el vínculo jurídico-político interesa a las personas jurídicas o morales en el mismo grado y medida que a las personas físicas.

Consideremos primeramente, en forma sumaria, el concepto de la *persona*, tomando como base las disposiciones de nuestro Código Civil al respecto.

El art. 51 dice que «son personas todos los individuos de la especie humana, cualesquiera que sean su edad, sexo o condición.» Añade, además, que se dividen en ecuatorianos y extranjeros.

Esta definición, como se puede notar a primera vista, se refiere a *individuos* y este término supone singularidad. Resulta incompatible con el sistema del Código por las siguientes razones:



1ª. Porque el artículo 50 divide las personas en *naturales y jurídicas*;

2ª. Porque el artículo 534 al definir la persona jurídica como *persona ficticia capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente*, señala, a la vez, dos especies de personas jurídicas: las corporaciones y las fundaciones de beneficencia pública; y

3ª. Porque las corporaciones y fundaciones, que son *personas*, no son *individuos*.

Por otro aspecto, el Código Civil, al tratar del principio de la existencia de las *personas* en el artículo 71, dice que el nacimiento de una persona, fija el principio de su existencia legal, siempre que viva veinticuatro horas, a lo menos, desde que fué separada completamente de su madre.

Tanto por la definición de *personas*, del artículo 50, tanto por el principio de existencia, del artículo 71, se colige que la ley se ha referido solamente a las personas físicas, habiendo establecido dos categorías de distinto alcance en el campo del derecho.

Por lo expuesto puede apreciarse ya la importancia que tiene para nuestra materia la determinación de conceptos. Por ello nos ha parecido esencial fijar, delimitar y diferenciar las ideas respecto a las dos *clases* de personas.

Conocidas las diferencias y la naturaleza de cada una, entonces sí podremos concluir acerca de si las personas jurídicas pueden también dividirse en extranjeras y nacionales. De confirmarse la solución positiva, habrá, igualmente, necesidad de establecer el sistema, el principio o la regla que ha de servir para concretar la nacionalidad de estos entes morales, así como existen ideas principios y reglas que sirven para fijar la nacionalidad de las personas físicas o naturales.

Ante todo, insistiremos acerca del contenido de las relaciones jurídicas, dentro del derecho civil.

Son relaciones jurídicas de carácter civil aquellas que se vinculan con dos instituciones fundamentales, como son la familia y la propiedad. Las personas naturales son las principales protagonistas en el campo de estas relaciones. Las personas jurídicas, que son ficticias, no tienen nada que ver con la familia, pero muchas de ellas no pueden perder de vista el patrimonio y en general la propiedad.

Las fundaciones de beneficencia pública se caracterizan por el fin social que cumplen, en la misma forma que las



corporaciones; y unas y otras, ya de derecho público o ya de derecho privado, nada tienen que ver con la familia. El Estado y los organismos del Estado, por ejemplo, se caracterizan por el don de ubicuidad, y en ningún caso pueden estar sujetos a las normas de la extranjería. Las personas jurídicas del derecho privado, compañías, empresas, etc., tienen mayor movilidad jurídica internacional; pues, constituidas conforme a la ley de un Estado, pueden ejercer sus actividades en otro y exigen, por esta razón, que se defina el estatuto legal por el cual se han de regir. Se debe a ésto el que los tratadistas de la materia hayan discutido, desde diversos puntos de vista, si las personas jurídicas deben o no tener una nacionalidad.

Para condicionar las relaciones civiles de familia y propiedad, la ley ha establecido el estado y la capacidad, asegurándolos por derechos de aplicación extraterritorial. Tratándose de las personas jurídicas no puede hablarse de *estado civil*, aunque si pueda hablarse de capacidad. Estado y capacidad, en cambio, corresponden plenamente a las personas físicas.

Además, la persona jurídica no nace como la persona física. El principio de la existencia legal de ésta se da por el nacimiento, pero advirtiéndose que el nacimiento no produce por sí mismo una persona física sino un individuo de la especie humana. La ley convierte al individuo en *persona*, cuando se encuentra dentro de la prescripción legal, por ejemplo, habiendo nacido y habiendo vivido veinticuatro horas, a lo menos, después de la separación del vientre materno.

La persona jurídica también se forma por obra de la ley. Cuando sus requisitos están cumplidos comienza su existencia legal, pero ésta no depende del hecho biológico del nacimiento ni está condicionada a éste, porque la persona jurídica no nace biológicamente como los individuos.

Varias legislaciones prescriben de modo expreso que la persona jurídica es distinta de los elementos que la componen. Nada tiene que ver, en consecuencia, con los individuos que la forman o constituyen.

La persona jurídica, por otro aspecto, es tan cierta como la persona física, porque la actividad jurídica que desarrollan ambas se encuadra en una orientación, en un estatuto y en una limitación conocidos.



Esto último se opone a que admitamos la teoría de Savigni que definió a la persona jurídica como persona ficticia, porque ficticio es lo que no existe, lo que no es cierto, o lo que es contrario a la verdad real.

Por fin, anotemos que los sistemas que sirven para la adquisición originaria de la nacionalidad, tratándose de las personas físicas, como el *jus sanguinis*, el *jus soli* y el mixto, son ajenos a la persona jurídica. Los vínculos de sangre, de familia, de origen, no pueden servir para determinar la nacionalidad de las entidades morales. Los medios derivativos como la naturalización, el matrimonio y las anexiones de territorios tampoco les son aplicables.

Al referirnos a la condición de los extranjeros en el capítulo anterior, dijimos que el sistema generalizado en cuanto al goce de los derechos civiles era el de la igualdad, después de haber diferenciado tres categorías de derechos: cívicos (públicos o garantías), políticos y civiles. Admitidas en la doctrina estas tres clases de derechos y suponiendo por un momento que se aceptase la distinción entre personas jurídicas nacionales y personas jurídicas extranjeras, tendríamos que afirmar que a las últimas corresponden las mismas garantías y derechos civiles que a las nacionales.

Pero como hemos indicado que la nacionalidad es un vínculo jurídico-político y que, cuando se virtualiza por la ciudadanía, sirve para el ejercicio de los *derechos políticos*, tenemos necesariamente que concluir que las personas jurídicas nada tienen que ver con la ciudadanía, porque no ejercen esos derechos, aunque puedan en determinados casos invocar la protección del Estado del cual se crean *nacionales*. Por ello, lo primordial es determinar el Estado que ha de protegerlas cuando las personas jurídicas de derecho privado se desarrollen en el exterior. Lo verdaderamente difícil en la doctrina está en fijar el principio para la determinación de su nacionalidad; y en esto, repetimos, no hay acuerdo posible, como veremos en el párrafo correspondiente de este capítulo, en el que estudiamos, de modo individualizado, los sistemas propuestos, algunos fallos de la jurisprudencia y las conclusiones respectivas.

¿Cuándo una persona jurídica del derecho privado ha de ser considerada como nacional, y cuándo como extranjera? He aquí el problema, Baste señalar la posibilidad de que diez o quince alemanes pueden formar en el Ecuador una



sociedad ecuatoriana. No crearían precisamente una sociedad de nacionalidad ecuatoriana sino una sociedad conectada con el Estado ecuatoriano, por vínculos que no son necesariamente los de la nacionalidad. La ley ecuatoriana será la ley de la constitución de la sociedad, supongamos, y esta ley determinará el alcance de sus actividades jurídicas y fijará los requisitos que necesite cumplir para ser reconocida como tal. Este es el modo como surge la conexión pero esta conexión no es *nacionalidad*.

Si de las diversas clases de personas jurídicas, tomamos únicamente las sociedades comerciales o industriales, es indudable que éstas deben su ser jurídico a un verdadero contrato; y en varios casos habrá de aplicarse la ley de la celebración, por ser el estatuto según el cual se ha originado la sociedad. La conclusión entonces fluye lógicamente: el estatuto de aplicación que nace del contrato de sociedad, no es ni puede ser nacionalidad.

Nos parece adecuado citar en esta materia el siguiente párrafo del Profesor Niboyet. Dice este Profesor: «¿Cómo es posible concebir una relación de orden político entre una persona moral y un Estado? Hay en ello algo que no se comprende. Un Estado se forma mediante sus nacionales los cuales constituyen la sustancia del mismo. Las formas con que los nacionales manifiestan su actividad no aumenta el número de ellos. No puede admitirse que España esté constituida, ante todo, por españoles (personas físicas) y además, por sociedades españolas en las cuales figurarán de nuevo los mismos nacionales. De admitir la opinión contraria habría que aceptar también que un Estado puede aumentar ficticiamente el número de sus nacionales. ¿Qué es realmente una sociedad, sino el efecto de un mero contrato, más o menos reglamentado, de derecho privado? ¿Y cómo es posible que un simple contrato pueda engendrar un ser dotado de nacionalidad, es decir de atributos políticos?».

Completando esta opinión, podríamos también aseverar que pueden existir en España sociedades españolas compuestas de extranjeros; y de la misma manera en todos los países según el sistema que adopten sus legislaciones. En este caso, la sociedad como tal no podría invocar la protección de ningún Estado que no sea el español, aunque podrían hacerlo los individuos particularmente considerados, con respecto a los Estados de que dependan. En definitiva tendría-



mos, pues, simplemente un problema de condición de los extranjeros.

Una persona jurídica, de cualquiera clase que sea, no es sino una forma colectiva de desenvolvimiento individual. Toda persona jurídica se descompone en personas físicas, y son éstas los únicos sujetos del Derecho Civil Internacional.

Con los antecedentes mencionados podríamos llegar a la conclusión de que una sociedad cualquiera constituida conforme a una ley, y procedente de un contrato jurídico tiene la ley y el contrato como estatuto originario, y éste regirá en el orden internacional de acuerdo con los principios generales de nuestra ciencia y con las excepciones que ella determina.

Por lo expuesto, nos parece inadecuado y perturbador el empleo de la palabra nacionalidad tratándose de las personas jurídicas, porque éstas no tienen ni pueden tener nacionalidad. Este vínculo corresponde sólo a las personas físicas. A aquéllas compete solamente una conexión jurídica porque no puede suponerse un ente jurídico desvinculado de toda sujeción.

Varios autores de nuestra materia emplean el vocablo nacionalidad, refiriéndose a las personas jurídicas; y las legislaciones y la jurisprudencia fijan sistemas para establecerla. El estudio de estos sistemas y su crítica será objeto del párrafo 14 de este capítulo.

## 6.—PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL DERECHO MODERNO.

1º.—*La nacionalidad no se impone.* Este principio no es sino una consecuencia de todo lo que dejamos expuesto anteriormente; pues al tratar del fundamento, se dijo ya que el único sistema compatible con el derecho moderno es el que sostiene que la nacionalidad se funda en un contrato sinalagmático entre el Estado y los particulares.

Hicimos notar que el sistema de la sujeción perpetua es incompatible con la libertad individual, porque haciendo de la nacionalidad un sello indeleble se lesiona la autonomía de la persona. El individuo obligado, de ordinario, por causas sociológicas (la historia registra un gran porcentaje de



éstas) a buscar los medios de su perfeccionamiento en un lugar que no es su Patria, se encontraría colocado en una situación contradictoria. Por un lado, vinculado al territorio, al medio humano y a la autoridad que le han proporcionado condiciones ventajosas de desenvolvimiento material y moral, condiciones que no le ha sumistrado precisamente su propia Patria, y por cuya causa se vió obligado a abandonarla. Por otro, seguiría sujeto a la dependencia política del Estado del cual depende originariamente, dependencia que no podría cesar, de aceptarse el sistema de la sujeción perpetua.

Esta dualidad afectaría profundamente las normas más elementales de la justicia porque se obligaría a un individuo a servir a una Patria que, aunque le ha visto nacer, pongamos por caso, no le ha servido para colmar sus legítimas aspiraciones. Frecuentemente se constata en la práctica que muchos hombres saliendo fuera han valorizado su vida en mayor grado que el que hubieran obtenido quedándose en su suelo de origen.

Pero es indispensable tener en cuenta que el principio por el cual *la nacionalidad no se impone* no quiere, en ningún caso, decir que el Estado carezca de la suficiente libertad para fijar los sistemas que han de servir para la constitución originaria del vínculo. Así, por ejemplo, nadie podrá discutir esta libertad a los Estados americanos que han creído conveniente determinar la nacionalidad por el principio de *jus soli*. En consecuencia, el principio que estamos estudiando deja a salvo todo sistema de nacionalidad originaria que conduce a una imposición del vínculo y no tiene otro alcance que el de confirmar la regla por la cual el vínculo así impositivamente adquirido, no puede mantenerse indefinidamente, prevaleciendo desde entonces, la libertad individual, para renunciarlo, readquirirlo o acogerse a otro de modo definitivo.

Son corolarios del principio referido los siguientes:

1º. La consagración de la libertad plena del individuo para escoger la nacionalidad que más le convenga;

2º. Deber de las legislaciones de reconocer esa libertad;

3º. Abstención por parte de las legislaciones a la admisión de todo sistema que en definitiva suponga una imposición de nacionalidad (salvando los sistemas impositivos para la adquisición originaria); y

4º. Deber del individuo de sujetarse a su ley originaria, cuando ésta establece requisitos especiales para desligarse de



la nacionalidad que quiere perder, efectivándose así todas y cada una de las consecuencias de la nueva nacionalidad que ha escogido.

En relación con el principio que analizamos, Caicedo Castilla, dice así, en sus *Conferencias de Derecho Internacional Privado*: «Tal regla significa que el Estado no puede prohibir a sus súbditos la renuncia, bajo algunas condiciones, de la nacionalidad de origen. Que la nacionalidad puede renunciarse, llenándose las condiciones legales es un postulado que se desprende de dicha regla. En Inglaterra durante mucho tiempo hasta 1868 y en Rusia hasta la caída del régimen zarista no se respetó el principio y se consagró el de la sujeción perpetua. Dos razones justifican la regla que examinamos: a) Hemos visto que el fundamento jurídico de la nacionalidad consiste en la existencia de un contrato sinalagmático. Ahora bien, ese contrato, no puede subsistir desapareciendo una de las voluntades que le sirven de base; b) Es un derecho primario o fundamental el que todo hombre tiene para vivir y desarrollarse. De ahí que cada individuo es libre para buscar en el extranjero las situaciones, las ventajas y los intereses que él repunte como indispensables para su bienestar y desarrollo y que estime como necesarios para su existencia. Por eso se admite el cambio de nacionalidad».

De la misma manera, Alcortá explica en los siguientes términos el significado del primer principio:

«La sumisión perpetua de la persona al Estado que le da el carácter nacional es una violación de la autonomía de esa persona, de la libre voluntad con que aceptó el vínculo contractual. La persona no está, no puede estar indefinidamente ligada a un territorio sin hacer abandono completo de los derechos que son inherentes a su condición de tal, sin desconocer la naturaleza jurídica de sus relaciones para con el Estado que pretende la sujeción».

Estanislao Zeballos, admite que el reconocimiento irrestricto del principio de que la nacionalidad no se impone viene a reforzar el corolario lógico de la desnacionalización. Opina que la libre expatriación es un derecho natural inherente a la libertad civil, y que el hombre, de la misma manera que puede contraer matrimonio o adquirir propiedades, puede igualmente renunciar a su Patria y adquirir una nueva.

2º. *Todo individuo debe tener una subordinación política.*—Tal es el segundo principio consagrado por el derecho



moderno. Acentúa la necesidad de que todo hombre sea miembro de una comunidad jurídico-política, esto es que pertenezca a un Estado determinado.

Weiss dice al respecto: «Toda persona debe tener una Patria. Si la sociedad necesita para constituirse y para funcionar regularmente del concurso de todas las fuerzas individuales, el hombre necesita también la ayuda de sus semejantes para realizar la completa satisfacción de sus apetitos y de sus deseos. Debe, pues, en virtud de una ley natural, pertenecer a un grupo más o menos numeroso, en el seno del cual desarrollará y ejercerá sus facultades».

Aunque pudiera tomarse como un exceso de repetición, insistimos nuevamente en afirmar que virtualmente no hay individuos sin Patria. Todo hombre ha nacido en algún lugar, se ha influenciado directamente con las manifestaciones de algún fenómeno sociológico como la religión, el medio geográfico o la lengua. Ha tenido, en consecuencia, una Patria. Lo que hay es individuos sin nacionalidad o sea sin subordinación política. Los elementos afectivos de la Patria son de más difícil eliminación que los elementos que integran un mero nexo de carácter político.

Por esta razón, el segundo principio lo hemos formulado como consta a la cabeza de este acápite, y corresponde, por lo tanto, explicar su significado y extensión.

Cada estado supone un orden jurídico. El fin del Estado es el derecho en su acepción más lata. Individuos sin subordinación política de ninguna clase, esto es sin nacionalidad, estarían fuera de todo orden jurídico. Y esto es imposible de aceptar, aunque supongamos remotamente la existencia de un orden jurídico universal humano fuera de las lindes de las nacionalidades. Un Estado universal, por utópico, es lejano de nuestras realidades actuales y tenemos que contentarnos con afirmar que cada Estado realiza el derecho a su modo, aunque en la concepción abstracta se diga que el derecho es uno sólo. Por esta razón claro está que un individuo sin nacionalidad estaría fuera de toda estructura jurídica; sería un cadáver entre seres vivientes, produciéndose así una anomalía sólo compatible con un estado absoluto de aislamiento, con un *estado de naturaleza* tan absurdo en los tiempos presentes en que la vida se manifiesta por una sociabilidad creciente y por un intercambio considerable.



Los mismos *apátridas*, desde la Convención de Ginebra de 1933 han sido quizá asimilados a los extranjeros como lo veremos posteriormente; y siendo el apátrida individuo sin nacionalidad ha demandado una intensa labor encaminada a subsanar una anómala situación antijurídica.

Hay algunas causas que producen en la realidad individuos sin subordinación, porque habiendo perdido su nacionalidad anterior no han adquirido una nueva. Mas, el empeño de la doctrina y de la generalidad de las legislaciones es precisamente el de evitar la *vagancia internacional*, combatir la presencia de apátridas; y este empeño es precisamente el que valora hasta su más alto grado el principio de que todo individuo debe tener una subordinación política.

Corolarios de esta regla, son los siguientes:

1.º—Todo individuo que por circunstancias especiales ha perdido su nacionalidad de origen, debe adquirir otra nueva o readquirir la anterior;

2.º—Deber de las legislaciones de eliminar sistemas que den lugar a la presencia de apátridas;

3.º—Interpretación por parte de las legislaciones de la voluntad presunta del individuo, a falta de su voluntad expresa, para hacer cesar la carencia de nacionalidad; y

4.º—La nacionalidad fijada en razón de la voluntad presuntiva no se entenderá en ningún caso como violación de la primera regla de que la nacionalidad no se impone.

Respecto al primer corolario no hay dificultad alguna. Es deber del individuo que ha perdido su nacionalidad de origen adquirir otra nueva. Esta adquisición puede fundarse en un acto expreso declarativo o simplemente en hechos que supongan tácitamente sometimiento a la soberanía del país en que reside.

Por el segundo corolario, las legislaciones de los respectivos países, dan lugar a la presencia de apátridas. Por ejemplo si una legislación establece que el expatriado por más de diez años pierde su nacionalidad de origen; y otra, la del país en que aquél reside admite la voluntad presunta de adquirir la nacionalidad a partir de una residencia de doce años, por ejemplo, estas dos legislaciones están dando lugar a la existencia de un apátrida, porque transcurridos los diez años ha perdido la nacionalidad de origen, y si no se naturaliza, será apátrida por dos años.



Esta materia debería ser regulada por una Convención internacional que estableciendo normas precisas, sirva de base a la uniformidad de un grupo de legislaciones, por ejemplo de un grupo continental. Todo otro procedimiento a intentarse resulta desprovisto de utilidad práctica.

Una previsión seguida por algunas legislaciones actuales para eliminar la presencia de apátridas consiste en obligar, al que renuncia la nacionalidad de origen, a dejar solemne promesa de naturalizarse en otro país, dentro del plazo que establezca la ley de este último, promesa que, caso de ser violada o no tener efecto, por alguna causa, anula la renuncia de la nacionalidad primitiva.

Los corolarios tercero y cuarto no son sino una consecuencia de los dos anteriores.

Al tratar de las excepciones a las reglas que venimos enunciando tendremos ocasión de concretar más ampliamente las proyecciones del problema de los apátridas.

3.º—*Nadie debe tener más de un vínculo de subordinación.*—Así como la doctrina y las legislaciones de los diversos Estados han procurado virtualizar la regla anterior, de la misma manera se ha procedido con respecto a este último principio.

Si no puede admitirse ausencia de nacionalidad, tampoco puede admitirse nacionalidad plural respecto de un mismo individuo.

La razón es muy sencilla. Dos o más dependencias políticas, pueden acarrear derechos y deberes contradictorios, dando lugar a conflictos que el Derecho Civil Internacional trata de reducir a su mínima expresión. Un individuo no puede ser nacional de dos Estados, de la misma manera que no puede tener dos madres o servir a dos amos. La doble nacionalidad, sería la subordinación contradictoria y excluyente, tanto o más reprochable que la ausencia de nacionalidad.

7.—LAS EXCEPCIONES.—Primera.—*Ausencia de subordinación: el caso de los apátridas.*—En el terreno de los hechos se presentan sin embargo las excepciones que es necesario considerar. Toda regla las tiene y ello en nada afecta a la



extensión del principio de que se deriva. Tal es el caso del que vamos a ocuparnos.

Tomamos como base para sistematizar este estudio las valiosas investigaciones de Marc Vichniac y de Estanislao Zeballos; y de acuerdo con dichos autores podemos llegar a las siguientes conclusiones:

Los *apátridas* o *heimathlosat* son individuos que han perdido su nacionalidad sin adquirir una nueva. El problema se remonta a las primeras migraciones humanas que al comienzo se originaron por causas religiosas. La principal fué la persecución de la herejía. Situaciones semejantes se constatan también en el Libro de *Los Números* que determinaba las ciudades que debían prestar asilo a los niños de Israel, a los fugitivos y a los extranjeros que no tenían *donde posar su planta*.

En Roma, el peregrino *sine civitate*, el *dediticio*, no pertenecieron a ninguna ciudad determinada ni pudieron invocar la protección de ninguna ley nacional.

La sociedad feudal puso en servidumbre al extranjero, y para concederle una protección muy limitada que no podía compararse con la que se deriva de la nacionalidad, le sujetó a gravosas cargas de servicio y obediencia.

En estos tiempos, causas de orden sociológico hicieron de la nacionalidad una característica vinculada a la religión, a la fidelidad y a la residencia en un suelo determinado. Hasta el siglo XIX la nacionalidad no es vínculo autónomo porque no se ha emancipado aún de los criterios predominantes, sociales y políticos.

A partir del siglo XVI, las convenciones internacionales que van solucionando las guerras de religión, empiezan a referirse al *jus emigrandi*. Se inicia así la determinación de la palabra *emigrante* y se le reconoce el derecho de tener autorización para cambiar de soberanía, de residencia, y en una palabra, de nacionalidad.

Posteriormente, la emigración cobra mayor amplitud, a causa de las anexiones o cesiones de territorios, hasta concretarse en el derecho moderno el principio de la libertad de expatriación. Rousseau lo defendió en sus doctrinas y si el principio no constó en la *Declaración de los Derechos del Hombre*, algunas legislaciones americanas lo habían ya consagrado. Pueden citarse las de Virginia, Kentucky, Pensilvania, etc.



En nuestros tiempos, ya lo dijimos antes, es regla indiscutible la de la libertad para renunciar la nacionalidad.

En el terreno de los hechos, se han presentado circunstancias contrarias a los principios doctrinarios y que, con justo motivo, han preocupado a legisladores y publicistas, a políticos y estadistas. Estas circunstancias se deben a la presencia de los apátridas, o sea de individuos que voluntariamente o no se ven privados de nacionalidad. El derecho ha tenido que dilatar su esencia de coordinación a tales individuos para buscarles un estatuto jurídico y para eliminar la anormal ambulación por el mundo de seres que prácticamente se han encontrado fuera de toda comunidad.

El Derecho Internacional admite el cambio de nacionalidad, pero no admite su falta. Era pues su deber combatir el resultado antijurídico de la *apatría*, transparentado en la realidad de los hechos. Y tanto más cuanto que la *apatría*, es una verdadera plaga social, como la juzgan Pillet, Sieber, Folleville, Oppenheim.

Desde luego, es necesario tener en cuenta que la *apatría* es un fenómeno de carácter sociológico, que no obedece exclusivamente a una voluntad aislada o a un querer individual. Lo demuestran la guerra del año catorce y la postguerra que aumentaron considerablemente el número de apátridas, en razón de las evacuaciones forzadas de territorios.

También han dado margen a la existencia y propagación de aquéllos, las leyes de rechazo a la naturalización, sobre todo para oponerse a la famosa *Ley Delbruck* dictada por Alemania, facultando a sus nacionales para naturalizarse en otros Estados sin perder su nacionalidad de origen.

Los autores han estudiado las causas posibles que pueden producir apátridas. Sintetizándolas, podríamos, entre otras, señalar las siguientes:

1ª. En razón de la existencia de sistemas opuestos en materia de adquisición de la nacionalidad, como por ejemplo entre el *jus sanguinis* y el *jus soli*.

Tal sería el caso del hijo de padres argentinos que nace en Alemania. La ley argentina requiere opción por esta nacionalidad para las personas que nacen en el extranjero. Alemania no considera el nacimiento en su suelo como modo de adquirir la nacionalidad. Si no hay opción por la nacionalidad argentina se presenta una causa de producción de



apátridas, que sólo desaparece cuando uno de los dos sistemas da efecto al otro, subsidiariamente.

2.<sup>a</sup> Se presentan también apátridas en razón del matrimonio, cuando los esposos corresponden a diversa nacionalidad, y uno de los Estados reconoce válido el matrimonio, y el otro nulo.

Para explicar esta regla es imprescindible considerar algunos aspectos esenciales. Se trata, en realidad, de matrimonios que se celebran entre individuos de distinta nacionalidad. Conforme a la ley de la mujer, supongamos que el matrimonio le haga perder su nacionalidad para seguir la del marido y que, conforme a la ley del marido, se arranque del matrimonio un efecto igual. El marido está siempre regulado por su estatuto personal, y si el matrimonio se ha celebrado en un país que no tiene la prohibición legal que establece la ley del marido, como por ejemplo, el matrimonio del hombre o mujer con el correo en el delito de adulterio, (suponemos, sólo a manera de ejemplo, que ésta fuera una causa de nulidad del matrimonio), es claro que el matrimonio válido en un país, es nulo en el otro, y si la mujer perdió su nacionalidad en virtud de un matrimonio que no existe, la mujer queda convertida en apátrida.

3.<sup>a</sup> Cuando el marido ha cambiado de nacionalidad posteriormente al matrimonio. En este caso los hijos pueden convertirse en apátridas y la mujer casada con extranjero, de la misma manera, cuando por oposición entre las dos legislaciones ha perdido su nacionalidad y no ha adquirido la del marido.

Se trata aquí, igualmente, de un matrimonio de dos individuos de distinta nacionalidad y se supone que ambas leyes determinan la pérdida de la nacionalidad de la mujer por el hecho del matrimonio. La mujer ha seguido pues la nacionalidad del marido; y si éste posteriormente se naturaliza en otro Estado cuya ley prescribe que la mujer conserva su nacionalidad, ésta queda convertida en apátrida; y de la misma manera los hijos menores de edad que conforme a la ley de la nueva nacionalización, no siguen la condición del padre habiendo perdido su nacionalidad originaria, según la ley del nacimiento.

4.<sup>a</sup> Se produce también el apátrida cuando se pierde la nacionalidad a título de pena, por ejemplo en razón de haber violado las leyes del servicio militar obligatorio,



La pérdida de la nacionalidad a título de pena deja al individuo sin subordinación política, y cuando no adquiere otra nacionalidad, se convierte en apátrida.

5.<sup>a</sup> Tenemos el mismo resultado, en razón de la transferencia de soberanía territorial; y este caso es de procedencia muy antigua como hemos dicho ya.

Los Tratados que siguieron a la guerra mundial ponen de manifiesto esta causa. Baste citar el de Saint-Germain con Austria y el de Trianón con Hungría.

Los casos de transferencia de soberanía, que de ordinario se resuelven por tratados dan lugar a los apátridas, en todos los casos en que para conservar la antigua nacionalidad se necesita cumplir con algunos requisitos que condicionan la admisión de un sistema como el origen o el domicilio, o ambos conjuntamente.

El verdadero problema de la apatría se presentó en Europa a raíz de la revolución rusa de 1917, preocupando hondamente a todos Estados. Hacia el año de 1921 se calculó en más de un millón el número de refugiados rusos que abandonaron en masa su país de origen para localizarse en varios Estados, advirtiéndose que un Decreto del Consejo de Comisarios del Pueblo, del mes de Octubre de 1921, desnacionalizó a todos los rusos que habían abandonado el territorio de la Unión Soviética sin autorización del Gobierno, o que de algún modo habían tomado parte en la contrarrevolución.

Tal estado de cosas obligó a pensar en los procedimientos por los cuales se determinara un estatuto jurídico aplicable a este número crecido de apátridas. Comenzó la discusión de si el apátrida podía ser o no ser considerado como extranjero. Algunos autores y publicistas indicaron que las causas políticas que motivaban la presencia de estos apátridas no podían equipararse a las causas ordinarias de la vagancia internacional; y en el caso de los refugiados rusos se dijo que ellos no podían igualarse a los apátridas vulgares. Formaron en realidad una categoría especial de heimathlosat.

Los primeros esfuerzos para librar esta situación correspondieron, y es justicia reconocerlo, a la Sociedad de las Naciones. Ella creyó oportuno establecer un alto Comisariato de los Refugiados; y después de muchas vacilaciones, presentación de varios memorándums, muchos de ellos procedentes de organizaciones rusas en el extranjero, y en fin,



después de medidas que se enderezaban a solucionar el difícil problema, se convino en enviar un *cuestionario* a los diez y seis países interesados en la solución, cuales eran: Bélgica, Suiza, Austria, Bulgaria, Francia, Rumania, Letonia, Estonia, Gran Bretaña, Egipto, Grecia, Alemania, Finlandia, Yugoslavia, Tchécoslovaquia y Polonia. Este cuestionario significa el primer esfuerzo serio para la solución que hubo de operarse en la Conferencia Internacional de Ginebra de 1933, que vino a precisar un estatuto para los refugiados rusos y armenios que era, en definitiva, un estatuto internacional de apátridas.

Son disposiciones principales de la Convención del 28 de octubre de 1933, las siguientes:

La del artículo 1º., que expresa que la Convención es aplicable a los refugiados rusos, armenios y asimilados, tal como han sido definidos por las resoluciones del 12 de Mayo de 1926 y el 30 de Junio de 1928 bajo reserva de las modificaciones o precisiones que cada parte contratante pueda aportar a esta definición, en el momento de la firma o adhesión.

La del artículo 2º., que determina que cada una de las Partes contratantes se compromete a expedir los certificados Nansen, válidos por un año al menos, a los refugiados residente regularmente sobre su territorio, para facilitarles la libre circulación.

La del artículo 3º., que expresa asimismo que las Partes contratantes se comprometen a no alejar de su territorio por aplicación de medidas de policía, tales como la expulsión a los refugiados que hubieren sido autorizados a permanecer regularmente, especialmente cuando estas medidas no hubieren sido dictadas por razones de seguridad nacional o de orden público.

El artículo 4º., es el más importante de la Convención porque establece el estatuto jurídico de los apátridas. Dice así: «El estatuto personal de los refugiados será regido por la ley de su domicilio o, en su falta, por la ley de su residencia.—La validez de los actos de autoridades religiosas en las que han intervenido los refugiados, cumplidos en los países que admiten la competencia de estas autoridades, será reconocida por los Estados Partes de la presente Convención.—Los derechos adquiridos bajo el imperio de la antigua ley nacional del refugiado, particularmente los derechos resultantes del ma-



trimonio (régimen matrimonial, capacidad de la mujer casada, etc.), serán respetados, bajo reserva del cumplimiento de las formalidades prescritas por la ley de su domicilio o, en su falta, por la ley de su residencia, si hay lugar».

El artículo 5º. prescribe que, bajo reserva de las disposiciones del artículo 4º., inciso 2º., la disolución de los matrimonios de los refugiados será regida por la ley de su domicilio o, en su falta, por la ley de su residencia.

El artículo 6º. establece que los refugiados tendrán, en los territorios de las Partes contratantes, libre y fácil acceso ante los tribunales. Determina, además, que en los países en que dichos refugiados tengan su domicilio o su residencia regular, ellos han de gozar de los mismos derechos y privilegios que los nacionales, y estarán en las mismas condiciones que éstos, bajo el beneficio de la asistencia judicial, quedando exceptuados de la *cautio judicatum solvi*.

Como puede apreciarse, por las disposiciones enunciadas, los refugiados quedaron asimilados a los extranjeros, y se determinó el sistema de la igualdad jurídica que lo estudiamos en el capítulo respectivo; pero, como puede observarse, esta solución bastante protectora y liberal, se encaminó a solucionar un problema ocasionado de preferencia por las causas políticas de la revolución rusa, y la Sociedad de las Naciones cumpliendo con los postulados del Covenant, empleó todos los procedimientos a su alcance para eliminar un caso anómalo en el Derecho Internacional.

Mas, como los refugiados rusos, armenios y asimilados, no pueden compararse a los casos aislados de la vagancia internacional, no podemos decir que, en todos ellos sería aplicable el estatuto jurídico de la Convención de Ginebra, quedando, en consecuencia, esos casos aislados por solucionarse dentro de las legislaciones particulares de los respectivos países.

En Alemania, desde la existencia de la Confederación de la Alemania del Norte, los Gobiernos que la componían celebraron en 1851 una Convención para suprimir los heimathlosat. El sistema admitido fué el de imponer la naturalización a toda persona cuya nacionalidad extranjera no estuviera claramente establecida.

Se deja notar que este sistema aparece a primera vista contrario a una de las reglas anteriormente expuestas; pero analizando sus requisitos podríamos asegurar que no existe



tal contradicción. Se exigió, efectivamente, que la persona en mención haya habitado el territorio del Estado durante cinco años, o seis semanas a partir de la celebración del matrimonio. Aquí tenemos la interpretación de la voluntad presuntiva que, conforme a uno de los corolarios de la segunda regla, no es considerado como imposición de nacionalidad. De este modo justificaron el sistema adoptado autores como Bluntschli, De Bar, Monsen, Neumann, etc.

Dichos autores fundaron lo que podríamos denominar las bases de una *teoría de la demanda jurídica*, que concretaba para el Estado el deber ineludible de atraer hacia la vida del derecho el elemento flotante del mundo, dotándole de una subordinación conocida.

Tales antecedentes han servido, a no dudarlo, para redactar el artículo 20 de la ley de Introducción al Código Civil alemán, concebido en los siguientes términos:

«Cuando una persona no pertenece a ningún Estado, sus relaciones jurídicas, en tanto la ley nacional sea declarada aplicable, se sujetarán a las leyes del Estado al cual dicha persona ha pertenecido en último lugar; y si no ha pertenecido a ningún Estado, le serán aplicables las leyes de su domicilio y a falta de éste, las de su residencia.»

El artículo 8º del Código Civil del Japón, de 1890, admitió idéntico principio.

El Código brasileiro prescribe también que el individuo que conforme a su ley nacional ha perdido la nacionalidad de origen sin adquirir otra, debe ser considerado como nacional del Estado donde se encuentra domiciliado.

Esta disposición ha dado margen para que tratadistas como Estanislao Zeballos sostengan que se trata de una violación de la regla de que la nacionalidad no se impone. Pero hemos manifestado antes que el domicilio puede dar lugar a una interpretación de la voluntad presuntiva del individuo. Cuando ésta no se demuestra en forma expresa, es necesario que la descubra la ley; pues es más preferible, en el orden jurídico internacional, una nacionalidad fundada en una voluntad inferida por presunción legal, que la ausencia absoluta de subordinación política.

El principio de que la nacionalidad no se impone simplemente quiere decir que la voluntad del Estado no ha de prevalecer sobre la voluntad del individuo, cuando éste la demuestre y sustente en forma cierta, sobre todo si se admite



el fundamento del contrato sinalagmático. Por ello, la falta de una voluntad expresa no puede conducir a la ausencia de nacionalidad.

Aparte de las legislaciones citadas, son muy raras las que regulan el caso de los apátridas, debiéndose a ésto que las de la Gran Bretaña, Francia, Italia, España, Dinamarca, Suecia, etc., den lugar a numerosos casos de heimathlosat que llegan, por diversos aspectos, a ser objeto de fallos por parte de los tribunales de los diversos Estados.

Segunda.—*La nacionalidad cumulativa*.—De la misma manera que no se admite ausencia de nacionalidad, en el terreno de los principios, no se admite nacionalidad plural o cumulativa para un mismo individuo; siendo éste otro de los principios fundamentales del Derecho Civil Internacional.

Laurent ha precisado la imposibilidad de la nacionalidad cumulativa en sus estudios de Derecho Civil Internacional. Tener dos Patrias, dice, es tan anómalo como no tener ninguna. Se trata de un imposible natural y jurídico, que lleva directamente a numerosos casos de conflictos porque, añade, no se puede ser a la vez soldado en Francia y soldado en Alemania.

De la misma manera, Rolin, afirma que la existencia de la doble nacionalidad es un fenómeno jurídico que solamente la imperfección del régimen internacional de nuestros días puede explicar. Desde el punto de vista de la razón, dice, todo individuo debe tener una sola nacionalidad, ya que, de estar revestido de dos o más vínculos diferentes, el nexo cumulativo puede originar y origina muchas obligaciones contradictorias.

Lapradelle, Fiore, y la generalidad de los autores de nuestra materia, atacan abiertamente a la nacionalidad cumulativa. Esto, sin embargo, no se opone a que otros autores y aún legisladores la sostengan como conveniente y necesaria.

Buzzati, de la Universidad Real de Pavia, admitió el principio de la doble nacionalidad, reservándolo para los Estados de América y particularmente para los de la América Latina. Cabe advertir que la legislación italiana, atendiendo a circunstancias particulares, ha creado en esta materia una escuela especial, de acuerdo con determinados hechos como la emigración que, en Italia, ha revestido caracteres considerables, pues hace pocos años se calculó aproximadamente en ocho millones el número de italianos que se encontraban distribuidos



entre varios países como Francia, Alemania, Suiza, Brasil, Uruguay, Norteamérica, etc.

Esta pérdida voluminosa de contingente nacional italiano, hubo de influir en su legislación, y por lo mismo, en el sistema de Derecho Internacional Privado, en el aspecto de la nacionalidad. Puede explicarse de esta manera la causa del desarrollo en Italia de la escuela de la *doble nacionalidad*.

La tendencia se fortificó en las doctrinas de Samama, al refutar un proyecto legislativo de Buzzati. Las consecuencias a que llegó, son las siguientes, que las anotamos sumariamente por el interés que presentan para la materia que estudiamos:

Refiriéndose a la regla de que todo individuo debe tener una nacionalidad, hizo hincapié en que los tiempos han cambiado y que las ideas que influyeron en la redacción del Código de Napoleón no podían tener la misma fuerza en los tiempos actuales, sobre todo si se atiende a los caracteres específicos que ha ido tomando el fenómeno migratorio.

Todo individuo que se dirige a un país cualquiera que le presta buena acogida, dice, se pone al abrigo de sus leyes; y éstas son las que hacen nacer un vínculo recíproco de afección. Desde este momento se puede, entonces, distinguir claramente dos Patrias: la de origen y la adoptiva.

Ante esta situación señala como norma la de que los individuos sujetos a doble nacionalidad deben regirse por la ley del domicilio en lo referente a su estado y capacidad.

Conforme a esta doctrina, el italiano emigrado a Francia sería francés y tornando a Italia, italiano. Se presentarían, por consiguiente, dos leyes diferentes acerca de la capacidad, en conflicto, y si el individuo en cuestión podría, según el principio sustentado por el autor al que nos referimos, divorciarse en Francia, no podría hacerlo en Italia.

El mismo autor anota que la doble nacionalidad no significa otra cosa que la manifestación de un Estado, según la cual se establece que sus emigrados no pierden su nacionalidad adquiriendo otra extranjera.

Concluye, por fin, manifestando que Italia no protege a sus súbditos contra el Estado de inmigración cuando se hayan domiciliado en éste, y que, de la misma manera, el Estado de inmigración no los protege contra Italia cuando han transferido su domicilio a este último país.



Esta doctrina es demasiado artificial y los argumentos empleados para sostenerla, no hacen sino reforzar el sistema de la nacionalidad única, mantenida por el Derecho Internacional Privado de nuestros días, como más conforme con el fundamento del contrato sinalagmático y con la necesidad de la permanencia del derecho.

Estanislao Zeballos manifiesta categóricamente que el cúmulo de nacionalidades no existe. Lo que algunos autores consideran, dice, como doble o múltiple nacionalidad, son simples declaraciones legales insuficientes para imponer al hombre una nacionalidad. No existe nacionalidad múltiple sino simplemente múltiples leyes sobre nacionalidad, fundadas en distintos sistemas, y contrarias las unas a las otras, como en el caso del *jus sanguinis* y del *jus soli*. En consecuencia, lo que se produce es únicamente el *conflicto de leyes sobre nacionalidad*.

Nos afirmamos, por consiguiente, en el rechazo absoluto a todo sistema que reconozca la existencia de la nacionalidad cumulativa, por ser contrario a la singularidad de las obligaciones que supone el vínculo de la subordinación política; y dejamos sentados los siguientes corolarios:

1º.—Imposibilidad jurídica de la acumulación de varios vínculos en un mismo individuo;

2º.—Deber de las legislaciones de no perpetuar una nacionalidad;

3º.—Voluntad determinante del individuo (así como del Estado) para la adquisición del vínculo;

4º.—Leyes distintas sobre nacionalidad, pero no dos nacionalidades distintas para un mismo individuo, porque serían dos fuerzas iguales y contrarias, capaces de neutralizar y dejar sin eficacia el dinamismo de la vida jurídica-humana.

Ultimamente, a raíz de la constitución de la República española, volvió a discutirse un tanto acaloradamente el problema de la doble nacionalidad.

El artículo 24, dice así, en sus dos últimos incisos:

«A base de una reciprocidad internacional efectiva y mediante los requisitos y trámites que fijará una ley, se concederá ciudadanía a los naturales de Portugal y países hispánicos de América, comprendido el Brasil, cuando así lo soliciten y residan en territorio español, *sin que pierdan ni modifiquen su ciudadanía de origen*».—«En estos mismos países, si sus leyes no lo prohíben, aún cuando no reconozcan



el derecho de reciprocidad, podrán naturalizarse los españoles, sin perder su nacionalidad de origen».

Algunos autores y jurisconsultos de América y Europa, han considerado estas disposiciones desde dos puntos de vista: moral, el uno; jurídico y legal, el otro.

Así procede don Vicente Tejera, abogado de los tribunales de Cuba, quien analizando el primer aspecto dice que la disposición de la Carta Política española es un paso de avance glorioso y serio para la fraternización universal, comenzando por unirse en bloque indeleble los hombres de una misma raza. El lado objetable, encuentra tomando la cuestión en un aspecto netamente jurídico o legal. Por ello, el jurisconsulto citado dice textualmente:

«Este ha sido un asunto en varias ocasiones planteado en el mundo. Unas veces en el derecho positivo; otras, en el campo de la doctrina. Y después de estudios profundos realizados observando los efectos que producían las leyes que en ese sentido se dictaran, se convino, casi de manera general, en el campo de la especulación mental, que era imposible el estado de cosas que creaba esa dualidad, porque la ciudadanía impone en los actuales momentos de la vida política de las naciones, ciertos deberes que son incompatibles con una doble nacionalidad».

Podemos afirmar que esta fué, en síntesis, la opinión de una gran mayoría de tratadistas acerca de las disposiciones de la Constitución española que hemos transcrito, reforzándose, de este modo, el principio fundamental del rechazo a la nacionalidad cumulativa.

Esta opinión mayoritaria fué resultado de la encuesta realizada por la Unión Iberoamericana, para conocer precisamente, el alcance del artículo 24 de la Carta citada, encuesta que se publicó en la importante *Revista de las Españas*.

Observamos, de paso, que la Constitución española incurre también en el error de confundir la nacionalidad con la ciudadanía; pues, usa ambos términos indistintamente, como si ellos tuvieran el mismo significado y contenido.



8.—ADQUISICIÓN ORIGINARIA DE LA NACIONALIDAD: POR LA SANGRE, POR EL SUELO Y POR EL SISTEMA MIXTO DE COMBINACIÓN.—Determinado el concepto de nacionalidad, establecidas sus reglas y analizadas las excepciones, no nos queda sino precisar las formas o modos de adquirirla.

Estos modos se clasifican en dos grupos: originarios y derivados. Los primeros comprenden los hechos iniciales condicionantes de la nacionalidad legal impositiva, como la sangre, el suelo, o la combinación de los dos. El grupo de los modos derivados, como su nombre lo indica, comprende las circunstancias posteriores a los hechos iniciales condicionantes que modifican libremente el vínculo primitivo y que confirman la regla de que no hay nacionalidad perpetua. Estos modos son la naturalización, el matrimonio y los cambios de soberanía territorial.

Estudiaremos primeramente los modos originarios, para tratar a continuación de los derivados, pero reiterando una vez más la circunstancia de que en los modos originarios, la ley impone la nacionalidad, porque élla se opera forzosamente, una vez realizado, por ejemplo, el hecho del nacimiento. En los modos derivados se estudian las causales voluntarias de la modificación del vínculo originario forzoso.

Esto, no contraría, en ningún caso, la regla de que la nacionalidad no se impone, pues toda nacionalidad originaria es consecuencia de una prescripción de la ley. En ésto no cabe la menor duda. La regla se refiere simplemente a los casos en que, una vez adquirido el vínculo forzosamente, sus modificaciones serán enteramente voluntarias, sin que la ley pueda mantener el encadenamiento perpetuo del individuo a una soberanía determinada.

Originariamente la nacionalidad se adquiere por tres sistemas que han sido muy sencillamente expuestos por Moreno Quintana. Tales sistemas son: el de la nacionalidad, fundado en el *jus sanguinis* y que se determina por la filiación; el de la nacionalidad territorial natural, fundado en el *jus soli* y que se determina por el lugar del nacimiento; y el sistema *mixto o combinado*, en que predomina uno de los sistemas anteriores completándose con el sistema contrario.

Ha sido objeto de apreciables polémicas, en el campo de la doctrina, la cuestión de precisar cuál de los dos sistemas corresponde mejor a las exigencias de la naturaleza humana. No corresponde ahora hacer un registro de las



abundantes razones con las que ha sido defendido uno u otro sistema, ni nos compete tampoco entrar a dilucidar cuál de los dos es el mejor. Nada se ganaría con un análisis racionalista que nos lleve a preferir un sistema antes que el otro, porque no conseguiríamos que, con una teoría general, por más bien fundada que fuese, se uniformen los sistemas diversos que prevalecen en las legislaciones. Ni siquiera la necesidad de evitar los conflictos, ha sido aliciente para que los Estados uniformen sistemas en tan complicada materia.

Por otro aspecto, por más poderosas que fuesen las razones en orden a la preferencia de uno de los sistemas, la verdad es que ambos, por iguales grados, han tomado una realidad jurídica concreta, relacionada con móviles sociológicos y políticos imposibles de desconocer. La entraña misma de las legislaciones en esta materia, es tan hondamente consolidada que no pecaríamos de aventurados si sostuviéramos que los conflictos de leyes, por razón de sistemas, en lo tocante a la adquisición originaria de la nacionalidad, serán los más difíciles de desaparecer. El Derecho Civil Internacional tendrá que trabajar más intensamente en esta parte que en cualquier otra, en virtud de una sola razón, cual es la de que la nacionalidad, relacionada con la parte integrante del Estado que es el elemento humano, es problema de soberanía, y de derecho público, y ningún Estado querría, por tal causa, modificar un sistema aclimatado por la tradición, por la herencia y la raza, para acoger otro nuevo, exponiéndose así a los riesgos de una peligrosa innovación.

He aquí por qué simplemente nos limitamos a formular los sistemas y a estudiarlos tales cuales se presentan dentro de la realidad legislativa, sin pretender señalar razones de preferencia.

Hemos dicho que son causas sociológicas y políticas las que motivan la admisión ya del *jus sanguinis*, ya del *jus soli*. Esto puede comprobarse con sólo observar las condiciones especiales de los pueblos de Europa en relación con los de América. Los primeros han preferido el *jus sanguinis*, porque siendo de antigua cultura y vieja historia, han visto crecer considerablemente el número de sus súbditos, por la emigración, sobre todo, dirigida a los pueblos del Nuevo Mundo, formados por la inmigración. Aquéllos tuvieron interés en que, por lo menos, los hijos de los emigrantes se



consideraran nacionales de los diversos Estados europeos, y como el sistema que llena esta necesidad es el *jus sanguinis*, lo incorporaron preferentemente en su legislación.

Al contrario, los pueblos del Nuevo Mundo, tuvieron interés en fijar la nacionalidad de cada uno de los Estados americanos, tomando como base el hecho del nacimiento en los respectivos territorios, para incorporar, de este modo, a la subordinación política continental, a los hijos de los inmigrantes europeos. Prefirieron, por lo mismo, el *jus soli*, que para algunos autores reposa sobre una ley sociológica fundamental, cual es la de la influencia del medio ambiente que transforma a los individuos modificando sus caracteres hereditarios y vinculándolos así al país del nacimiento.

El *jus sanguinis*, hace que los hijos, donde quiera que nazcan, sigan la nacionalidad de los padres; y el *jus soli*, impone la nacionalidad del suelo en que han nacido esos hijos, prescindiendo de la nacionalidad de los padres. Estos sistemas contradictorios han puesto de relieve los problemas de conflicto entre los Estados de Europa y América; han permitido que se hable de la doble nacionalidad y que se susciten aspectos de tan difícil resolución que, de no prevalecer la voluntad de los individuos en materia de subordinación política, la ciencia jurídica general, no hubiera podido, seguramente, decir la última palabra.

Debemos insistir en esta parte, lo que ya anotamos antes, esto es, rechazar como jurídicamente imposible la coexistencia de dos nacionalidades para un mismo individuo, y admitir solamente la existencia de varias leyes que fundadas en sistemas diversos, producen los conflictos que le toca al Derecho Civil Internacional resolver.

El sistema mixto de combinación hace primar uno u otro de los sistemas expuestos, y no presenta dificultades susceptibles de análisis.

En el acápite correspondiente de este capítulo hacemos una revisión de algunas legislaciones desde el punto de vista de aspectos importantes relacionados con la nacionalidad. En cuanto a los conflictos, serán considerados en la parte respectiva, según la programación a que hemos querido ceñir esta *Guía*.



9.—ADQUISICIÓN DERIVATIVA: POR LA NATURALIZACIÓN, POR EL MATRIMONIO Y POR LOS CAMBIOS DE SOBERANÍA TERRITORIAL.—Mencionados los modos originarios de adquisición de la nacionalidad, entramos a estudiar la adquisición derivativa de la misma.

Conviene, al respecto, decir que se presentan ciertos acontecimientos en la vida social-jurídica del individuo, que pueden modificar su nacionalidad. Estos acontecimientos son la naturalización, el matrimonio y los cambios de soberanía territorial, a consecuencia de las anexiones o cesiones que interesando al Derecho de Gentes, afectan considerablemente al Derecho Civil Internacional.

Siendo la nacionalidad un estatuto ordinariamente admitido, para regular las relaciones del Derecho Privado Internacional, se comprende el por qué nuestra ciencia tiene necesariamente que abordar los problemas que interesen al vínculo jurídico político, en que se funda dicho estatuto de aplicación.

Los modos originarios, por su naturaleza, se derivan de la intención de la ley de cada país, que define quienes son o han de ser sus nacionales (súbditos del Estado). Esa ley determinará alguno de los sistemas e impondrá una nacionalidad susceptible de modificarse por la voluntad que origina los modos derivados como la naturalización y el matrimonio, o la cesión de territorios (voluntad colectiva, plebiscito, etc., o fuerza, si se trata de guerra o conquista).

Estudiaremos, por lo mismo, la naturalización. Un individuo se naturaliza en un Estado, cuando adquiere la nacionalidad de este último, abandonando, como dice Alcorta, la que tiene en el momento en que el acto se efectúa.

No son precisas mayores explicaciones para poder apreciar que la naturalización es una consecuencia lógica e inmediata, de ordinario, de la libre expatriación, o sea del derecho ilimitado del hombre para buscar su bienestar en cualquier país del mundo. La naturalización produce la desnacionalización. Es la prueba más evidente de la acción de la voluntad que modifica el vínculo originario fundado en cualquiera de los sistemas antes expuestos.

El Profesor Weiss, define la naturalización como un acto soberano y discrecional de la autoridad pública por el cual una persona adquiere la calidad de nacional del Estado que esa autoridad representa.



Se dice que la naturalización es un acto soberano y discrecional, porque corresponde a la autoridad del Estado el concederla o negarla. No basta, en consecuencia, la sola voluntad individual para producirla, sino que requiere aceptación por el Estado, cumplimiento de los requisitos de sus leyes o sea, efectividad de un acto bilateral que concluye en una desnacionalización y en una nueva nacionalidad. De aquí que la mayor parte de las legislaciones determinen diversos procedimientos para conceder sus cartas de naturalización, y entre ellos el primordial consiste en la prueba misma que establece a conciencia el hecho por el cual, mediante la adquisición de una nueva nacionalidad, se pierde la que se tenía anteriormente; y aún más, la declaración por parte del individuo de la renuncia a cualquier otro vínculo anterior, es otro de los requisitos generalmente admitido en las legislaciones.

Esta exigencia se encamina simplemente a evitar la nacionalidad cumulativa para un mismo individuo que, como se dijo ya, produce graves y a veces insubsanables anormalidades.

Es en la adquisición de la nacionalidad por naturalización donde se demuestra plenamente que el fundamento de aquélla está en la existencia de un contrato sinalagmático entre el Estado y los particulares, concretándose la voluntad del primero en sus leyes, y la de los últimos, ya expresa, ya tácitamente, por la solicitud de la carta o por la sumisión espontánea a la acción normal de la ley; pues, como observa Torres Campos, la eficacia del principio por el cual la nacionalidad no se impone, en nada afecta al poder de un Estado para atribuir la nacionalidad a un extranjero cuando no ha manifestado éste, de una manera formal, la voluntad de adquirirla.

El autor citado justifica tal facultad en la siguiente forma:

«El Estado es soberano en su territorio, y tiene, por consiguiente, el incontestable derecho de fijar por una ley, las reglas que desea aplicar a la adquisición o pérdida de la nacionalidad; y estas reglas adoptadas por él, son de orden público internacional, en el sentido de que las prescripciones diferentes de una legislación extranjera no pueden prevalecer contra ellas en la extensión de su territorio». (Torres Campos.—Elementos de Derecho Internacional Privado).



Niboyet, Moreno Quintana, Isay y otros autores, participan de esta misma opinión al referirse en sus obras al carácter jurídico de la naturalización.

Interesa conocer también el alcance que élla ha tenido, dentro de la evolución histórica; y siguiendo al Profesor Matos en su *Curso de Derecho Internacional Privado*, podemos afirmar los siguientes resultados:

En *El Exodo* se estableció categóricamente el requisito de la circuncisión para los extranjeros que quisieren asociarse a la celebración de la pascua, anotándose que el extranjero circuncidado se asimilaba en todo al nacional de origen.

Esparta no reconoció ningún procedimiento de naturalización sino meramente circunstancias excepcionales como en el caso de Tisamenes que fué naturalizado ciudadano, a pesar de las disposiciones terminantes de las leyes de Licurgo.

Atenas concedía la naturalización por servicios relevantes prestados a la ciudad, y la concesión se revestía de especiales requisitos que fueron atemperándose a medida del desarrollo que cobraban las relaciones mercantiles y que produjeron, además, la aceptación del extranjero dentro de las diversas categorías que quedaron explicadas en el capítulo II.

En Roma el extranjero pudo obtener una naturalización puramente individual, que no aprovechaba ni a la mujer ni a los hijos, excepto en los casos de concesión expresa. Esta era la naturalización propiamente pública que dependía de la expedición de un senado-consulta o de la confirmación judicial de la prueba de error. En esta última que tenía lugar cuando en las nupcias un quirite romano se había engañado acerca de la nacionalidad de su espos., probado el error, se producía, como efecto jurídico, el derecho de ciudad para la mujer y para los hijos de dicha unión procedentes.

La naturalización en Roma se ocasionó, además, por la voluntad de los particulares como en los casos del esclavo liberto o del extranjero adoptado por un quirite, quienes adquirirían ipso jure la calidad de ciudadanos romanos.

Fué de derecho consuetudinario en el pueblo germano el dar cabida al extranjero en la tribu, previo el consentimiento común y mediante la residencia de un año continuo. Pero la verdadera ciudadanía o sea la facultad de portar armas y actuar en las asambleas de guerreros, dependió siempre de concesiones específicas.



Durante la edad media, se concedió a los extranjeros la adquisición del *derecho de burgo*, con la condición de la residencia fija, el juramento de fidelidad y el pago de ciertas sumas en dinero que variaron de ciudad a ciudad. Posteriormente, el *aubano*, sobre todo en Francia, adquirió la nacionalidad mediante carta de naturalización otorgada por el rey.

Todas las disposiciones sobre naturalización, emanadas del período de la Revolución, tuvieron un carácter ocasional hasta 1809 en que se concreta con precisión el sistema de las cartas, concediéndose la facultad de otorgarlas, al Poder Ejecutivo y generalizándose hasta los tiempos actuales este procedimiento, con las variantes que ha creído del caso establecer cada legislación.

Tales son en síntesis los antecedentes históricos de la naturalización. Importa ahora estudiar sus clases.

Alcorta divide la naturalización en dos clases:

1ª. Ordinaria o común, que se aplica a las personas libres (*sui juris*, para emplear este término romano con toda exactitud) que no dependen de otras;

2ª. Privilegiada o especial, que se aplica a aquellas personas que dependen legalmente de otras, como los hijos de familia y las mujeres casadas.

Varios autores indican que la primera clase supone la naturalización individual, y la segunda, la naturalización colectiva. Con el objeto de esclarecer este punto, sujeto a confusiones, cabe indicar que si bien la primera clase supone una naturalización individual, en cambio, la segunda no implica naturalización colectiva. Esta no se presenta sino en los casos de cambio de soberanía territorial, como veremos a continuación.

Moreno Quintana, dice al respecto:

«La nacionalidad adquirida por la mujer o el marido en virtud del matrimonio, sólo tiene efecto con respecto al cónyuge y nunca respecto de los hijos. Son ajenas, en principio, las normas jurídicas acerca del cambio de nacionalidad de los padres por razón del vínculo matrimonial, a los hijos, y éstos tienen, o la nacionalidad de los padres, o la del suelo en que han nacido, según las legislaciones. No existe, pues, la naturalización colectiva de la familia por cambio de la nacionalidad de la mujer o del marido».

Por lo dicho, es preferible emplear el término *naturalización individual*, cuando nos referimos a la naturalización



ordinaria o común, y las palabras: *privilegiada* o *especial*, al referirnos a la naturalización de la mujer casada y de los hijos menores de edad, dejando el empleo de las palabras: *naturalización colectiva*, para los casos que se originan de las ane-  
xiones o cesiones territoriales.

Ambas formas de naturalización tienen requisitos espe-  
ciales en las legislaciones; y al estudiar oportunamente la  
nuestra, los concretaremos de modo sistemático, y en lo posible  
completo, sin dejar también de anotar los puntos importantes  
de esta materia, comparativamente en varias legislaciones  
americanas y europeas.

Estudiemos ahora la influencia del matrimonio en el  
cambio de nacionalidad. ¿Puede el matrimonio como institu-  
ción del derecho civil tener fuerza suficiente para operar el  
cambio de subordinación política de uno u otro de los cón-  
yuges?

El caso frecuentemente admitido es el de la desnaciona-  
lización de la mujer quien, por razón del matrimonio, pierde  
su nacionalidad, para seguir la del marido. Tomamos en con-  
sideración, desde luego, sólo los matrimonios en que uno de  
los cónyuges es extranjero. Los matrimonios entre dos per-  
sonas de la misma nacionalidad, no dejan margen para difi-  
cultades de ninguna clase.

La doctrina no ha llegado a pronunciarse de un modo  
definitivo. Los autores disienten en cuanto a la fuerza que  
el matrimonio puede tener para desnacionalizar a uno de los  
cónyuges; y por ello, los hay muchos que sostienen que la  
mujer debe conservar su propia nacionalidad, discrepando en  
ésto del sistema seguido por una gran mayoría de legislaciones.

Rivera Reyes en un importante estudio acerca de la na-  
cionalidad de la mujer casada, indica que esta cuestión ha  
sido muy discutida en la Conferencia de Codificación del De-  
recho Internacional, celebrada en La Haya al iniciarse el año  
de 1930, y observa que al reconocer la Conferencia la na-  
cionalidad de la mujer casada sobre la base de la desigualdad  
de los sexos, se pudo apreciar el enorme disgusto que esa  
actitud produjo en la representación de los Estados Unidos



que se vió obligada a votar en contra de la Convención sobre nacionalidad.

Hay que recordar que en el año de 1923 la quinta Conferencia Panamericana de Santiago de Chile emprendió en el estudio de un proyecto declarativo de la igualdad política y jurídica de hombres y mujeres en el Continente americano, proyecto presentado por el Delegado de Guatemala. Posteriormente, en 1929 el Instituto de Derecho Internacional aprobó una resolución concebida en los siguientes términos:

«Artículo 1º.—Es un deber de los Estados reconocer a todo individuo el derecho igual a la vida, a la libertad y a la propiedad, y acordar a todos, sobre su territorio, plena y entera protección de ese derecho, sin distinción de nacionalidad, sexo, raza, lengua o religión».

«Artículo 4º.—Ningún motivo sacado directa o indirectamente de la diferencia de sexo, raza, lengua o religión, autoriza a los Estados a rehusar a ninguno de sus nacionales derechos privados y los derechos públicos, especialmente la admisión a los establecimientos de enseñanza pública, y el ejercicio de las diferentes actividades económicas, profesiones e industrias».

Hay que mencionar que en los últimos tiempos se ha abierto una campaña feminista considerable a favor de la no influencia del matrimonio en la nacionalidad de la mujer casada, y ha sido la Comisión Interamericana de Mujeres la que ha trabajado en el sentido de ganar terreno para la conquista de sus aspiraciones.

El aspecto hay que plantearlo desde dos puntos de vista completamente diferentes:

1º.—Desde el punto de vista de la evolución de los principios liberales del Derecho de Gentes; y

2º.—Desde el punto de vista estrictamente jurídico de las relaciones del Derecho Civil Internacional.

Tocante al primero no hay duda que es altamente plausible el aspirar a la igualdad plena, sin distinción de sexos; pero tocante al segundo punto el problema merece más detenida consideración.

Efectivamente, uno de los fines asignados al Derecho Civil Internacional es el de procurar la permanencia jurídica de los individuos, dotarles de protección estable, uniformar los sistemas legislativos, y eliminar, en lo posible, los conflictos de leyes.



¿Cómo conseguir esta finalidad si en el matrimonio, institución fundamental del derecho civil, se empieza por reconocer un doble estatuto de nacionalidad correspondiente el uno al marido y el otro a la mujer? Es una necesidad social, y a la vez jurídica, mantener a todo trance la unidad de la familia; y el único principio compatible con esta unidad es y será el de afirmar la ley nacional del marido como ley nacional del matrimonio. Dos estatutos dentro de una misma sociedad es algo tan contradictorio y anómalo que la ciencia jurídica no puede jamás admitir. En contadas ocasiones podrían la ley nacional del marido y de la mujer estar de acuerdo, pero, generalmente, el desacuerdo es la regla, emanándose de ello consecuencias tan graves que a más de afectar la unidad de la familia, multiplicarían los conflictos que nuestra ciencia se propone precisamente evitar.

Sin embargo, autores de gran prestigio como Alcorta, no admiten esta solución, fundándose en que en el estado actual de las legislaciones la nacionalidad común con el marido no es esencial para el matrimonio, porque, dice el autor citado, que el ejercicio de los derechos políticos y las cargas principales de la nacionalidad no atañen a la mujer.

En nuestro concepto, tal argumento no resiste al más elemental análisis; pues, baste anotar que si la ciencia persigue un solo estatuto para el matrimonio, no es porque desconozca que la mujer ha sido extraña a las cargas principales de la nacionalidad como el servicio militar, por ejemplo, sino porque, ante todo, una disciplina de tanto alcance como la nuestra persigue de preferencia la sistematización de la actividad jurídica internacional de las personas, mediante la uniformidad de principios y reglas jurídicas.

Además, si de ordinario, las legislaciones, en lo que se refiere al estatuto personal, prefieren la ley nacional a la del domicilio, es claro que para cualquier conflicto originado en razón del matrimonio sea mucho más sencillo manejar una sola ley que dos, de ordinario opuestas, contradictorias y excluyentes.

Será, pues, el marido con la capacidad de su ley nacional el que represente legalmente a la mujer y a la sociedad, que de admitirse que la mujer no pierde su nacionalidad por el matrimonio, sería hacer por demás anárquica e inestable esta institución, por cuanto gran número de derechos civiles (esta-



do, capacidad, relaciones de familia, etc.) se fundan en la ley de la nacionalidad de las personas.

He aquí las razones por las cuales, y considerando exclusivamente el campo específico y necesario del Derecho Civil Internacional, propugnamos el estatuto único del matrimonio, regulado por la ley nacional del marido que, por causas altamente jurídicas ha eclipsado en la práctica la ley nacional de la mujer.

Entramos ya en el estudio del cambio de nacionalidad a consecuencia de las transferencias de soberanía territorial de los Estados.

¿Cuáles son los efectos que se producen en virtud de los cambios de soberanía territorial? Estos efectos se los estudia desde dos puntos de vista diferentes relacionados, el primero, con el Derecho de Gentes; y el segundo, con el Derecho Civil Internacional. El primero comprende los procedimientos por los cuales un Estado sufre una desmembración de su territorio, es decir, pierde ejercicio de soberanía, y otro Estado gana soberanía y dominio territorial.

Toda esta materia, en lo que dice relación exclusivamente a los Estados como miembros de la comunidad de Naciones o personas del Derecho Internacional, se rige por los principios del Derecho de Gentes, y es extraña, por lo mismo, a la ciencia que estudiamos.

Pero, en cuanto estos cambios de soberanía o estas transferencias territoriales interesan a los individuos, no pueden menos que quedar comprendidos en el programa de Derecho Civil Internacional, debiéndose a ésto el que necesitamos precisar los principios doctrinarios, y referirnos a los sistemas seguidos por algunos tratados que han concretado las formas de la pérdida o adquisición de nacionalidad.

Uno de los principales efectos de los cambios de soberanía y que afecta directamente a los individuos, es el de la nacionalidad, advirtiéndose que en los tiempos modernos, la influencia de los principios del derecho ha corregido notablemente las antiguas costumbres que, como lo hace notar Alcorta, se traducían en hacer del vencido un esclavo sometido a la ley del vencedor, sin reconocerle ningún derecho



en cuanto a la libertad para escoger o no la nacionalidad del Estado anexante, de ordinario Estado conquistador que imponía la ley de la fuerza.

En nuestros días, el problema tiene un distinto alcance; pues, es de suponer que en todos los casos en que se trata de anexiones o cesiones, forzadas o voluntarias, de territorios, el Estado que gana soberanía estará interesado en que el elemento humano contenido en las zonas cedidas o anexionadas, no sea extranjero sino nacional. Y al contrario, el Estado que pierde territorio, si quiere conservar sus súbditos, renunciando sólo a la base física y geográfica, tendrá que resolver problemas vinculados con la densidad de la población, ya que necesitará espacio adecuado para colocar al elemento humano que ha preferido acogerse a la subordinación política del Estado desmembrado.

En la doctrina, es preciso estudiar o determinar las diversas categorías de individuos a las que interesa, preferentemente, un cambio de soberanía.

Selosse, citado por Alcorta, precisa las siguientes categorías:

1.<sup>a</sup> Individuos domiciliados en el territorio anexado. Esta clase comprende los siguientes grupos:

- a). Originarios del territorio anexado;
- b). Originarios de una porción de territorio no cedido del Estado desmembrado; y
- c). Individuos extraños a la nacionalidad de este Estado.

2.<sup>a</sup> Originarios de los países anexados, que se subdividen también en los siguientes grupos:

- a). Domiciliados en la porción no anexada del Estado desmembrado;
- b). Domiciliados en el territorio del pueblo anexante; y
- c). Domiciliados afuera, o sea en cualquier otro Estado.

Respecto de todas estas categorías, no sería posible declarar que ellas toman la nacionalidad del Estado anexante, porque siendo las transferencias de soberanía territorial un modo derivado de adquirir el vínculo político, una naturalización colectiva de carácter impositivo, sería violación de una de las reglas que hemos analizado anteriormente.

Es preciso, pues, no imponer la nacionalidad del Estado anexante, determinando ciertos sistemas que aparezcan com-



patibles con la voluntad individual. Estos sistemas pueden reducirse a los cuatro siguientes:

- 1.º El del domicilio;
- 2.º El del origen;
- 3.º El del domicilio o el del origen; y
- 4.º El del domicilio y el del origen.

Conforme al primero, se dirá que todos los individuos que al tiempo de la anexión tienen su domicilio en la parte territorial que ha sido cedida o anexada, adquieren la nacionalidad del Estado anexante.

Se funda este sistema en la circunstancia de ser el domicilio un hecho revelador de vinculaciones permanentes, vinculaciones que difícilmente pueden eliminarse y que, al contrario, demuestran una aclimatación estable y consolidada del individuo a ese territorio determinado.

Siendo el domicilio, como lo define nuestro Código, la residencia acompañada real o presuntivamente del ánimo de permanecer o avecindarse en un lugar, nada más natural, por tanto, que fundarse en ese hecho, para arrancar de él la adquisición de la nacionalidad. Las diferentes leyes precisan en forma categórica los elementos que sirven para constituir domicilio, y más aún, las circunstancias reveladoras del ánimo de permanecer y avecindarse.

Pero como hay que dejar a salvo la voluntad del individuo, admitido el sistema, se dejará la libertad para trasladar el domicilio a cualquiera parte del territorio del Estado que sufrió la desmembración, revelando esta circunstancia la decisión de mantener la anterior nacionalidad.

Empleando este primer sistema y aplicándolo a las categorías que dejamos expuestas, tomarían la nacionalidad del anexante, los siguientes individuos:

- 1.º—Los domiciliados en el territorio anexado, siendo originarios de ese mismo territorio; y
- 2.º—Los domiciliados en ese mismo territorio, aun cuando hayan nacido en cualquiera otra porción, no cedida, del Estado desmembrado.

No se nacionalizan las demás categorías porque ya no les es aplicable el sistema del domicilio; y el grupo c) de la primera clase, nada tiene que ver con el cambio de soberanía, desde que conforme a una regla de derecho, la condición de un tercero no puede modificarse nunca por un acto celebrado



entre particulares o entre naciones y respecto al que ha permanecido ajeno.

Por el segundo sistema del origen se establece que todos los individuos nacidos en el territorio que se ha anexado a otro Estado siguen la nacionalidad del anexante, en virtud de haberse colocado bajo su soberanía el territorio en el cual nacieron.

Podemos observar que el sistema del origen tiene menos fuerza que el del domicilio, por la sencilla razón de que el hecho ocasional del nacimiento en un lugar determinado, no puede dar al individuo una vinculación tan fuerte como le da el domicilio. Efectivamente, puede un individuo nacer en cualquiera parte, y tener en otra distinta el centro de sus afecciones familiares, el establecimiento de sus negocios, y en general, la totalidad de sus intereses humanos. Es claro que el nacimiento por sí solo, será un hecho tan debilitado y remoto, incapaz de prestar base para fundar en él una nacionalidad. Lógico es, nos referimos a todos los casos en que, para una misma persona, el origen y el domicilio son diversos, que, de coincidir ambos elementos refiriéndolos al mismo lugar, la vinculación es más fuerte y completa y no estaría garantizada de admitirse uno u otro de los sistemas aisladamente.

Empleándose el sistema del origen, tomarían la nacionalidad del Estado anexante los siguientes individuos:

1.º—Los originarios del territorio anexado, con o sin domicilio en ese territorio;

2.º—Los domiciliados en la porción no anexada del Estado desmembrado, pero nacidos en esta porción;

3.º—Los nacidos en esta misma porción y domiciliados en el territorio del pueblo anexante; o sean: el grupo a) de la primera clase y los grupos a), b) y c) de la segunda clase.

El tercer sistema del domicilio o del origen, se traduce en los tratados cuando se establece que toman la nacionalidad del Estado anexante los individuos nacidos o domiciliados en la parte del territorio que sufre la anexión.

Como se ve, se reconoce una u otra calidad: el origen o el domicilio, para fundar en cualquiera de estos hechos la adquisición de la nueva nacionalidad.

Según este sistema se desnacionalizan de su vínculo originario, para adquirir el del Estado anexante, los grupos



a) y b) de la primera clase, y los grupos a), b) y c) de la segunda clase.

El cuarto sistema del origen y del domicilio es quizá el que reconoce la más completa vinculación del individuo; pues, exige ambas circunstancias para concretar la adquisición de la nacionalidad del Estado anexante; pero en la práctica diplomática ha dado lugar a algunas dificultades, como se verá oportunamente.

Recurriendo a este sistema, quedarían nacionalizados los siguientes individuos: la categoría a) de la clase primera que comprende a los domiciliados en el territorio anexado y originarios de ese mismo territorio, y quizá la categoría b) de la clase segunda, por comprender individuos originarios de los países anexados con domicilio en el territorio del pueblo anexante.

Como puede apreciarse, siendo este sistema un tanto exigente, nacionaliza al menor número de individuos; y a pesar de ello, no ha dejado de seguirse por algunos tratados que han sancionado las anexiones o cesiones de territorios.

Estudiados así los sistemas cabe sin embargo preguntar si en las soluciones que frecuentemente se dan a los cambios de soberanía, en razón de la nacionalidad de los habitantes, se comprenden la mujer casada, los menores, los interdictos, etc. Indudablemente que la anexión o cesión tiene un carácter esencialmente general, y que por lo mismo debiera indistintamente abarcar a todo el grupo humano que se encuentre en el territorio objeto de la desmembración, haciendo caso omiso de la condicionalidad que se presenta en razón de ciertas instituciones del derecho civil, como la familia, la tutela o la interdicción.

Alemania, Inglaterra e Italia, han dado en la práctica a la naturalización este carácter generalísimo, envolviendo en los efectos de las transferencias de soberanía, a todos los individuos indistintamente.

Mas, ésta no es una solución uniforme, y por ello, la ciencia del Derecho Civil Internacional ha procurado contemplar algunos principios que regulan la situación de los habitantes implicados en alguna forma por tal o cual institución del derecho civil.

Estos principios son los siguientes:

Refiriéndonos a la mujer casada, si ésta permanece en el territorio que ha sido objeto de la cesión y el marido man-



tiene ahí mismo su domicilio, se hace depender su subordinación política, de su voluntad efectivada por el derecho de opción.

Contempla este caso la nacionalidad diversa de los cónyuges, de modo que si la mujer perdió su nacionalidad de origen a consecuencia del matrimonio para seguir la del marido, y si éste, posteriormente, adquiere una nueva nacionalidad, en virtud de un cambio de soberanía, es natural que sólo el derecho de opción ha de servir para determinar la nacionalidad de la mujer; y sobre todo, en aquellos casos en que por oposición de leyes corra la mujer el riesgo de quedar apátrida.

Así mismo en el caso de matrimonio, si el marido mantiene su residencia en el territorio cedido y la mujer no, el principio quiere que la mujer conserve su nacionalidad originaria.

Si la mujer permanece en el territorio cedido y el marido no, la mujer adquiere la nacionalidad de su domicilio.

Si el marido era nacional del Estado al que correspondió la zona territorial desmembrada, y la esposa era extranjera y conservaba su propia nacionalidad a pesar del matrimonio, la mujer queda extranjera, no obstante su domicilio y la nueva subordinación política del marido.

Si la mujer está separada simplemente del marido, conserva su nacionalidad o adquiere la del domicilio, según el caso.

Si esta divorciada, es considerada como cualquier individuo libre.

Con respecto a los hijos menores y a los pupilos, se admite que si ellos se encuentran en la porción anexada o cedida, no siguen la nacionalidad primitiva; y si se radican en el Estado desmembrado y los padres en la porción anexada, conservan su nacionalidad originaria.

Nos hemos limitado, en esta parte, a hacer constar estas reglas tales cuales han sido formuladas por el Profesor Amanancio Alcorta, en su *Curso de Derecho Internacional Privado*.

Veamos ahora los sistemas que se han admitido en algunos tratados.

Caicedo Castilla cita tres casos importantes en la historia del derecho europeo: 1º.) La anexión de Saboya y del Condado de Niza a Francia, en 1860; 2º.) La anexión de Alsacia y



Lorena a Alemania, en 1871; y 3o.) La reanexión de estos mismos territorios a Francia, por el Tratado de Versalles de 1919.

El primer caso se definió por el Tratado de Turín de 24 de Marzo de 1860, que estipuló que las personas de nacionalidad sarda, originarias de Saboya o Niza y domiciliadas allí, que quisieren conservar su anterior nacionalidad, tendrían el derecho de cambiar su domicilio a Italia en el plazo de un año, a partir del canje de ratificaciones del Tratado. Traslados a Italia, necesitarían, además, hacer una declaración para mantener su anterior nacionalidad.

Como se ve, reconoció el cuarto sistema del domicilio y del origen, habiéndose presentado algunas dificultades ocasionadas por un decreto posterior del Gobierno francés, que prescribía que para la adquisición de la nacionalidad francesa por parte de los sardos originarios y domiciliados en Saboya y Niza, se necesitaba una declaración expresa. El Tratado establecía de pleno derecho la nacionalidad del Estado anexante sin más requisitos que el origen y el domicilio, o la manifestación de voluntad por la anterior nacionalidad, trasladando el domicilio a Italia y declarándose a favor de esta nacionalidad. Los tribunales adoptaron diversas interpretaciones, y en definitiva, la Corte de Casación hizo primar sólo las estipulaciones del Tratado, o sea, el domicilio y el origen, sin traslado a Italia, como condicionantes de la nacionalidad francesa.

El Tratado de Franckfort, de 10 de Mayo de 1871, después de la derrota francesa de Sedán, determinó la anexión de Alsacia y Lorena a Alemania, y estableció que los franceses originarios de esas provincias y domiciliados en ellas, que quisieren conservar la nacionalidad francesa, deberían trasladar su domicilio a Francia y hacer una declaración hasta el primero de Octubre de 1872.

En este Tratado se aplicó también el sistema del origen y del domicilio para fijar la nacionalidad alemana, con dos requisitos a favor de la nacionalidad francesa: el traslado del domicilio y la declaración.

La interpretación de este Convenio originó serias dificultades entre los Gobiernos francés y alemán. El primero sostenía que el Tratado no implicaba de ningún modo a los individuos que no tenían sino una sola de las calidades, ya domicilio, ya origen; y observaba, con razón, que en el caso de



los nacidos en Alsacia y Lorena, pero domiciliados en otros territorios al tiempo de la anexión, éstos no podían seguir la nacionalidad alemana, puesto que el Tratado sólo aplicaba este vínculo a los individuos que tuvieran ambas calidades: domicilio y origen, pero no una sola de ellas.

El Gobierno alemán sostenía el punto de vista contrario, y así lo hizo declarar en la Convención adicional interpretativa del Tratado de Franckfort. De todos modos, no se mencionó a los simples domiciliados en Alsacia y Lorena, y por esta causa, cada uno de los Gobiernos los reclamó como súbditos suyos, dando lugar a numerosos conflictos que no alcanzaron, en ningún caso, una solución que satisfaga plenamente a las Partes. En lo relativo al servicio militar obligatorio, por ejemplo, muchos domiciliados de esos territorios que Alemania los demandaba como nacionales alemanas, fueron juzgados por los tribunales franceses como desertores.

En la reanexión de Alsacia y Lorena a Francia por el Tratado de Versalles de 1919, puede verse prácticamente cómo una de las causas de la guerra europea fué un afán de desquite a las situaciones sancionadas en el Tratado de Franckfort de 1871; y estudiando la reanexión puede llegarse a concluir, que es en ella en que se arbitraron todos los procedimientos posibles, para renacionalizar franceses a todos los individuos que debían su calidad de alemanes al Tratado de 1871.

El artículo 79 del Tratado de Versalles reintegró la nacionalidad francesa:

1º. A los antiguos franceses desnacionalizados por el Tratado de Franckfort; 2º. A los descendientes legítimos o naturales de esas personas; 3º. A los nacidos en las provincias reanexionadas, de padres desconocidos. La nacionalidad francesa se readquirió de pleno derecho, pero se reconocieron otros dos modos para obtenerla: por vía de reclamación y por vía de naturalización.

Podían reclamar la nacionalidad francesa, en el plazo de un año contado desde la vigencia del Tratado, los siguientes: 1º.) Los que no la hubieren adquirido de pleno derecho, pero siempre que figurase entre sus ascendientes un francés o una francesa que hubieren perdido esta nacionalidad por el Tratado de 1871, 2º.) Todo extranjero, exceptuados los alemanes, que hubiere tenido el indigenato de Alsacia y Lorena, antes del 3 de agosto de 1914. 3º.) Todo alemán domiciliado en Al-



sacia y Lorena, siempre que el domicilio procediere de una fecha anterior al 15 de julio de 1870, o si uno de los ascendientes estaba en esa época domiciliado en esos territorios. 4º.) Todo alemán nacido o domiciliado en Alsacia y Lorena y que hubiere prestado sus servicios en los ejércitos aliados y asociados durante la guerra mundial. 5º.) Toda persona nacida en Alsacia y Lorena, de padres extranjeros, antes del primero de mayo de 1871, y los descendientes de esa persona. Y 6º.) El conyuge de toda persona reintegrada a la nacionalidad francesa, ya de pleno derecho, ya por reclamación.

Hay que advertir que aparte de otras circunstancias que merecen interpretación y estudio detenidos en las estipulaciones que hemos transcrito, el último caso ha dado margen a varios conflictos porque la disposición no se refiere sino al cónyuge en general, sea éste hombre o mujer, y siendo ésta la reintegrada en el goce de la nacionalidad francesa, el marido sigue esta situación, no conformándose así la disposición a la regla frecuentemente admitida por las legislaciones, de que la mujer es la que sigue la nacionalidad del marido. En el caso propuesto, venía a ser el marido el que seguía la nacionalidad de la mujer, cuando ésta tornaba a ser francesa en virtud de las disposiciones del Tratado.

Por vía de naturalización pudieron también obtener nacionalidad francesa los alemanes nacidos y domiciliados en Alsacia y Lorena justificando los siguientes hechos: 1º.) Domicilio en Alsacia y Lorena con anterioridad al 3 de agosto de 1914; y 2º.) Residencia ininterrumpida en dicho territorio, durante tres años, a partir del 11 de noviembre de 1918, fecha del armisticio.

Podemos, pues, apreciar en este Tratado una sistematización completa de procedimientos para desnacionalizar a los alemanes que debían esta calidad al Tratado de 1871, y aún más, para incorporar a la nacionalidad francesa a muchísimos individuos que por tal o cual razón mantenían sus conexiones en los territorios reanexionados, a partir de 1870.

No podemos terminar este párrafo sin considerar un aspecto que va cobrando mucha importancia para nuestra



materia. Se trata, aquí, de precisar si las personas jurídicas, al igual que las personas físicas o naturales, sufren o pueden sufrir las consecuencias de una anexión o, en general, de un cambio de soberanía territorial.

Al referirnos a la nacionalidad y al concepto de *persona*, hemos puesto de relieve las diferencias entre las personas jurídicas y las naturales, y hemos dejado para un acápite posterior de este capítulo, el estudio de cada uno de los sistemas propuestos por la doctrina para determinar la nacionalidad de las entidades morales.

Lo que nos interesa, por ahora, es simplemente esclarecer algunos puntos relacionados con la influencia de los cambios de soberanía, en lo que afecta a las personas jurídicas, que, de ordinario, corresponden al derecho privado.

Podemos al respecto sentar algo así como una regla general de acuerdo con algunas hipótesis, susceptibles de análisis, tomando en consideración las legislaciones del Estado anexante y del Estado desmembrado que pierde una parte de su territorio, por cualquiera de los medios que contempla el Derecho Internacional Público.

Demos por supuesto que la legislación del Estado desmembrado admita la nacionalidad de las personas jurídicas y que la reconozca también la legislación del Estado anexante, y que una y otra, consideren el domicilio aceptando como tal la sede administrativa-jurídica de la empresa.

Supongamos que la empresa que tiene su centro de explotación en el territorio que se cede a otro Estado, tiene su sede jurídica en Inglaterra. El cambio de soberanía del territorio sobre la base de igualdad de leyes entre el Estado anexante y el anexado en nada afecta a la nacionalidad inglesa de la empresa, pero es de acuerdo con las leyes del Estado anexante que deberá llevarse a cabo la actividad de la compañía. Aquí no hay problema de nacionalidad sino apenas una cuestión de control ceñida a la ley del lugar en que la compañía explota su industria.

Pero si la legislación del Estado desmembrado admite como domicilio el centro de explotación y la del Estado anexante la sede jurídica de la empresa, y suponiendo que el centro de explotación se encuentre en la parte del territorio cedido, lógico es admitir que la Compañía queda sujeta a la ley del Estado anexante, élla determinará la nacionalidad, conforme a su ley y puede, entonces, darse el caso de que



una Compañía que tuvo su nacionalidad determinada por el centro de explotación de negocios, la pierda, para adquirir la nacionalidad de la sede administrativa-jurídica, si ésta está prescrita por la legislación del Estado anexante. Una empresa radicada en un territorio que se emancipa de una ley y una soberanía, para seguir otra ley y otra soberanía, ya no mantiene conexión alguna con el Estado desmembrado, pero podrá, en todo caso, invocar los derechos legítimamente adquiridos.

Desde luego, en los Tratados no se prescinde de considerar los cambios de nacionalidad tanto de las personas físicas como de las personas jurídicas, y por esta razón, conviene, de preferencia, estudiar las respectivas cláusulas de dichos Tratados, con referencia a las legislaciones del Estado desmembrado y del Estado anexante.

Lecouturier dice: «Una sociedad constituida en Alsacia y Lorena bajo el imperio de la ley alemana, no está manifiestamente conforme a las prescripciones de la ley francesa. Sin embargo, ella podría funcionar en Francia, porque la ley francesa había ya autorizado a las sociedades extranjeras a ejercer todos sus derechos en Francia y a comparecer en justicia conformándose a las leyes francesas».

Todos y cada uno de estos aspectos, merecen un análisis detenido por la importancia que revisten en el derecho moderno, pero este análisis escaparía a la extensión que hemos querido dar a este libro, y nos limitamos, por ello, a sentar principios muy generales, que han de servir de base para estudios más completos y específicos.

10.—EFECTOS DE LA NATURALIZACIÓN.—Después de estudiadas las diversas clases de naturalizaciones; y habiendo establecido que éstas se dividen en tres categorías que son: la individual, la privilegiada y la colectiva, correspondiendo a esta última la adquisición derivativa de la nacionalidad, por los cambios de soberanía, es del caso ya referirnos a los efectos de la naturalización.

Tocante a la individual o común que se aplica a los individuos libres que no dependen de otros, se precisan dos



efectos fundamentales: 1º. Ser singular; y 2º. No tener carácter retroactivo.

Es singular, porque se aplica exclusivamente al individuo en sí mismo, y no quedan comprendidos en élla ni la mujer ni los hijos, aunque por actos posteriores sigan la primera, y los últimos, la naturalización del marido o el padre.

Algunas legislaciones, sin embargo, arrancan de esta naturalización un efecto general para la mujer y los hijos menores. Para la primera, según la regla por la cual pierde su nacionalidad para seguir la del marido; y para los segundos, por la necesaria dependencia de la patria potestad, haciendo que los hijos sigan la condición del padre, hasta el cumplimiento de la mayor edad en que pueden optar ya por la nacionalidad del nacimiento, o ya por la de la nueva naturalización del padre.

La naturalización no tiene efecto retroactivo. Esto se aplica a las tres clases indicadas, porque todas éllas no rigen sino para lo venidero, no regulan situaciones anteriores sino en los casos en que la ley ha dado este efecto, y son actos jurídicos completos, desde el momento de la expedición y publicación de la carta, desde la fecha de la opción, o desde la del tratado que concreta una anexión o una cesión de territorios.

Estos son efectos que podríamos llamar generales, pero hay además otros particulares que se los estudia:

- 1º.—Respecto del individuo que se ha naturalizado;
- 2º.—Respecto del país que concede la carta;
- 3º.—Respecto del Estado cuya subordinación se pierde.

Con relación al individuo puede manifestarse que el naturalizado queda en la misma condición que un nacional de origen, teniendo, por lo mismo, el goce y ejercicio de los derechos públicos, civiles y políticos.

Pero, algunas legislaciones, establecen para el desempeño de ciertos cargos públicos, el requisito de la nacionalidad por nacimiento, y particularmente, para ser Presidente, Vicepresidente de la República o legislador.

El naturalizado no está sujeto a la extradición por hechos posteriores a la naturalización. La legislación argentina, entre otras, mantiene esta previsión, prescribiendo que no se concederá la extradición, cuando el reclamado fuese ciudadano argentino, natural o naturalizado antes del hecho que motive la solicitud de extradición.



Respecto al país que concede la carta, éste adquiere un nuevo súbdito al que puede exigir el cumplimiento de sus deberes de nacional, debiendo, a su vez, el nuevo Estado darle la debida protección dentro y fuera de su territorio. La protección diplomática, desde luego, sólo se hace efectiva, cuando empleados, sin ningún resultado, los procedimientos consagrados por cada legislación, aparece evidente la violación de un derecho que no ha sido reparado o una manifiesta denegación de justicia.

Respecto al Estado cuya subordinación se pierde, el naturalizado desata todos los vínculos que mantiene con aquél y queda en la situación de cualquier extranjero. Alcorta dice: «Este efecto es el que nace naturalmente de un cambio de nacionalidad, y está de acuerdo con los principios liberales y concordantes con las nuevas doctrinas que consagran la expatriación como un derecho y la naturalización como su consecuencia forzosa. Sin embargo, no es admitido generalmente sin restricciones determinadas.»

Por este mismo efecto que estudiamos, desaparecen los deberes de protección por parte del Estado, ya que fundándose la nacionalidad en un contrato sinalagmático, desaparecida una de las voluntades que concretan el nexo, el nexo mismo se extingue.

Tales son los efectos de la naturalización, debiendo añadir que, en lo que se relaciona con la de carácter colectivo ésta, en definitiva, se traduce en una serie más o menos numerosa de naturalizaciones individuales, quedando sujeta a las mismas reglas.

Respecto de las personas jurídicas, no podemos sentar una regla general, limitándonos a manifestar que si el Estado que pierde territorio ha reconocido en su legislación una nacionalidad para dichas personas, y así también lo reconoce la legislación del anexante, es claro que las entidades morales quedarán naturalizadas por los cambios de soberanía, sólo que la dependencia es distinta en grado comparándola con la de las personas físicas; pues, aquéllas, no ejercen derechos políticos, son extrañas al servicio militar obligatorio; y en general, a los derechos y cargas ordinarios de la nacionalidad. La naturaleza del vínculo de las personas jurídicas no arroja otra conclusión que el deber de éstas de someter su actividad a las leyes locales. Este sometimiento no puede compararse con el que supone la nacionalidad ordinaria. De aquí que sea



muy importante el esclarecer en la doctrina si las personas jurídicas necesitan o no de la nacionalidad.

11.—EL DERECHO DE OPCIÓN.—De ordinario, al desarrollar los aspectos de este capítulo relacionado con los diversos tópicos de la nacionalidad en lo que ellos interesan al Derecho Civil Internacional, hemos tenido que referirnos al *derecho de opción*. Hoy compete definir el alcance de este derecho para asignarle la exacta finalidad que le corresponde.

Sentamos, de antemano, la siguiente regla: *en todos los casos de naturalización individual, no existe el derecho de opción, porque las cartas que los Estados conceden, no dependen sino del cumplimiento de los requisitos establecidos por las diversas legislaciones, los mismos que, una vez satisfechos producen el efecto jurídico de la adquisición de una nueva nacionalidad.*

El derecho de opción, en estricto sentido, se aplica en la naturalización privilegiada y en la colectiva, debida ésta, a los cambios de soberanía. No es posible que en tales casos se impusiera imperativamente una nacionalidad a la mujer casada y a los hijos, ni a los habitantes de un territorio que ha pasado a someterse a otra soberanía. Es indispensable que se consulte la voluntad y que sea élla la que determine la existencia de una subordinación política definida y coordinada con los sistemas que adopten los Estados o las leyes, éstas, para la naturalización individual, aquéllos, para la colectiva.

Algunos autores no hacen esta distinción y al referirse al derecho que estudiamos, solamente consideran el aspecto de los cambios de soberanía; pero es fácil advertir que un criterio semejante, resulta un tanto incompleto, puesto que existe una opción que es completamente ajena a las transferencias territoriales. Tal criterio parece seguir el Profesor Joseph L. Kunz en su importante estudio *L'option de Nationalité*, cuando define este derecho diciendo que es la facultad perteneciente a las personas afectadas en su nacionalidad por una sucesión de Estados, de pronunciarse por su antigua



nacionalidad por un acto espontáneo dependiente de su voluntad libre.

Notemos, a este respecto, que las causas que dan lugar a la sucesión de Estados están claramente determinadas por el Derecho Internacional Público. Hay sucesión en todos los casos en que se extingue una entidad política, como cuando se rompe una unión para dar lugar al nacimiento de otras entidades independientes y soberanas. Entonces se presenta la necesidad de resolver acerca de la suerte que correrán los tratados que ha celebrado el Estado desaparecido, las deudas que éste tenía, su dominio público, los litigios pendientes, etc. El Derecho de Gentes ha sentado reglas más o menos precisas al respecto, que no corresponde ahora recordarlas.

Pero, iguales o análogos problemas se presentan en los casos en que un Estado pierde una parte de su territorio nacional, sin desaparecer como persona internacional. Quizás aquí no haya propiamente un problema de sucesión, sino de mero traslado de obligaciones que de ordinario se regulan por las estipulaciones de los tratados. En cambio, existe un problema de nacionalidad de los habitantes que vivían bajo la subordinación política del Estado desmembrado.

Nos inclinariamos, pues, a sostener que el derecho de opción no se presenta sólo en los casos de sucesión de Estados, sino también en los de desmembración territorial. No discutimos que también en estos casos se hable, por ejemplo, del aligeramiento de la deuda pública del Estado desmembrado, porque una parte proporcional de ésta la tome a su cargo el Estado que gana soberanía territorial; pero creemos, que la verdadera sucesión, sólo se produce cuando un Estado desaparece como persona, ya para fundirse en otro (sucesor total), o ya para subdividirse en varios, autónomos y soberanos.

Cuando se trata de la extinción total de un Estado, por ejemplo, no cabe ninguna opción por la nacionalidad anterior, porque el Estado que fué la fuente de esta nacionalidad, se ha extinguido. Aquí habrá una verdadera sucesión, y sin embargo, no hay derecho de opción, porque éste no tendría razón de ser.

El mismo Profesor citado, indica que la opción de la nacionalidad, nada tiene que ver con la naturalización, porque es, dice, en estricta oposición a ésta, *un acto jurídico unilateral del optante*. No participamos de este criterio por la



sencilla razón de que jamás se puede establecer una nacionalidad sobre voluntad unilateral, y porque hemos acentuado el principio de que el vínculo político depende de un acto bilateral, de un contrato, como dice Weiss, que produce obligaciones y derechos recíprocos.

Si el Estado que gana territorio, en virtud de una anexión, pongamos por caso, no puede imponer la nacionalidad a los habitantes, y juntamente con el Estado que pierde ese territorio determina en un tratado el derecho de esos habitantes para optar por la anterior nacionalidad, la opción no es unilateral; pues, la opción, voluntad del individuo, corresponde, a la ley o tratado que la acepta, voluntad del Estado; y las dos voluntades conjuntas son las que dando base al contrato, concretan una nacionalidad determinada.

Que la opción nada tenga que ver con la naturalización, es una cuestión de palabras. Muchos autores, al referirse a los cambios de soberanía, emplean los términos: *naturalización colectiva* que, lógico es, difiere de la *ordinaria*, que se precisa por un acto soberano y discrecional de la autoridad pública. Pero aún siendo una la naturalización ordinaria y otra distinta la colectiva, operada por transferencias de soberanía y efectivada por el derecho de opción, la verdad es que en una y otra hay siempre voluntad bilateral, contrato sinalagmático.

ÁREA HISTÓRICA  
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL

El efecto jurídico primordial de la opción, válida y legalmente realizada, es el de concretar en un individuo la nacionalidad del Estado en cuyo favor ha hecho la opción. Pero, de esta misma regla se desprende o puede desprenderse un efecto contrario para el individuo que no optó antes de la expiración del plazo señalado. Este efecto es el de convertirle en súbdito del Estado que ganó dominio en virtud de una cesión o anexión.

No necesita de mayores explicaciones éste que hemos llamado efecto contrario, ya que, los requisitos que señala un tratado para que el súbdito de una entidad política conserve la nacionalidad que antes de la anexión tenía, no son sino facilidades prestadas para la manifestación de la voluntad. Si el individuo opta por la nacionalidad anterior, conserva este vínculo de subordinación; si se abstiene de usar del derecho conociendo el resultado que le produce el no uso, es claro que tácitamente ha revelado su intención de acogerse a la nacionalidad del Estado anexante.



No somos partidarios tampoco de admitir la regla por la cual todo cambio de soberanía entraña automáticamente cambio de nacionalidad.

Cierto que un Estado que gana territorio, tiene interés en no aprovechar solamente ese territorio vacío, tanto más cuanto que en él se radica un elemento humano con sus vinculaciones, con su herencia, con sus tradiciones. Tampoco tendrá interés en recoger un territorio integrado exclusivamente por extranjeros. Lo que no aceptamos es que los Estados tengan un derecho ilimitado sobre los hombres y que éstos corran ciegamente las contingencias de la voluntad oficial. Es indispensable consultar la voluntad de los individuos; y si bien la herencia o la sangre valdrían para suponer que todo cambio de soberanía entraña cambio automático de nacionalidad, empero, la gravedad de los problemas que estos hechos encierran, ha dado lugar a complicadas situaciones, difíciles de resolver, habiendo tenido la ciencia jurídica que introducir los llamados plebiscitos, y el mismo derecho de opción, lo que prueba que es algo aventurado el admitir ipso jure el cambio de nacionalidad con el cambio de soberanía.

Una teoría semejante corresponde quizás al feudalismo, en que el ejercicio de soberanía se equiparó a la tenencia en feudo, estando el siervo prácticamente confundido con la tierra, identificado con ella sin poder libremente disponer de su destino.

Hoy las ideas han cambiado considerablemente en esta materia y los estudios profundos que se han intentado acerca de la opción, y la práctica seguida generalmente por los tratados, probando están el valor y la fuerza que tiene la voluntad humana para condicionar los efectos jurídicos de las transferencias de soberanía territorial.

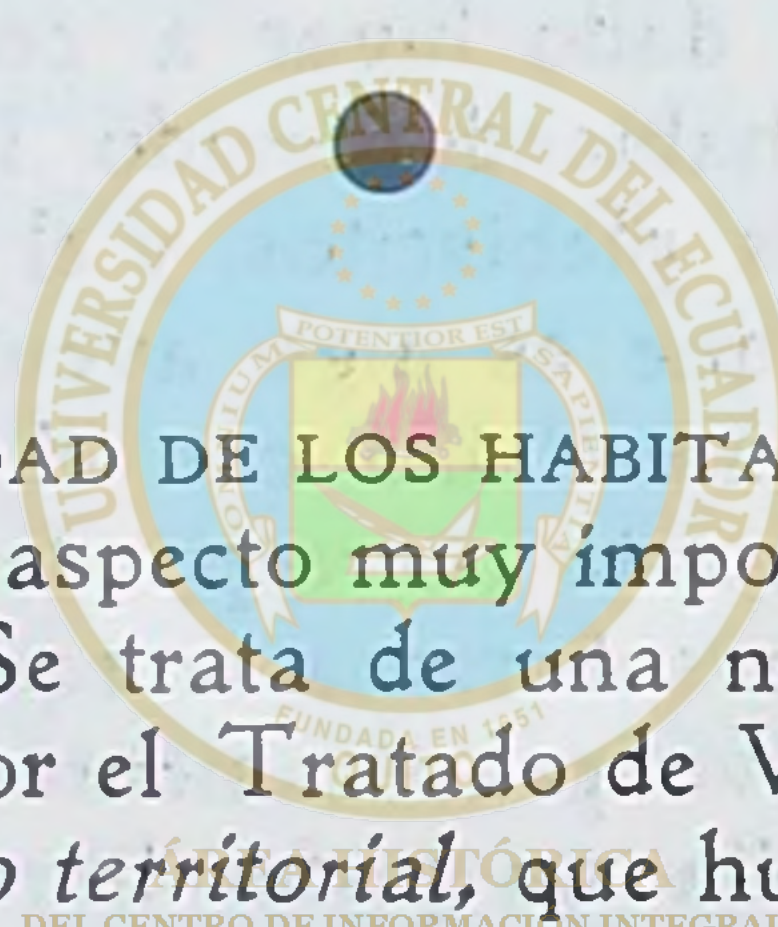
A pesar de todo lo expuesto, el Tratado de Versalles que puso fin a la guerra mundial, no se ha inspirado en las nuevas ideas que prevalecen acerca de tan delicada materia.

Dijimos antes que el Tratado quiso satisfacer un interés de desquite. El desarme fué aislado, nadie quiso secundar la obra del Tratado. La mutilación territorial de Alemania dió margen a una nueva institución con el nombre de mandato territorial, para distribuir entre los vencedores las colonias alemanas. Este mandato quizás sea la manzana de la discordia que la paz de Versalles la preparó para que en el presente y en el futuro sea un mito el ideal pacifista del mun-



do. Por fin, se procuró a todo trance desnacionalizar el mayor número de alemanes, como se vió al estudiar la reanexión de Alsacia y Lorena. Pero, además de todo esto, el Tratado en mención amplificó desmedidamente el principio del domicilio frente a nuevos Estados como Polonia y Tcheco-eslovaquia.

Los alemanes domiciliados el 10 de Enero de 1920 no sólo en un territorio alemán cedido a estos Estados sino en cualquiera de los territorios reconocidos como parte integrante de una de las dos naciones citadas, adquirieron de pleno derecho, en esa fecha, la nacionalidad polonesa o tcheco-eslovaca, sin ninguna formalidad. No hubo derecho de opción y se volvió así a las prácticas antiguas, desconocedoras de la libertad humana, en mengua de la evolución jurídica de los tiempos modernos.



12.—NACIONALIDAD DE LOS HABITANTES SUJETOS A MANDATO.—He aquí otro aspecto muy importante para la materia que desarrollamos. Se trata de una nueva institución internacional establecida por el Tratado de Versalles de 1919, con el nombre de *mandato territorial*, que hubo de justificarse, revistiéndola con los caracteres de una misión de cultura confiada a los *Estados civilizados*.

Esta innovación está contemplada por el artículo 22 del Tratado, que dice:

«Los principios siguientes se aplican a las colonias y territorios que a consecuencia de la guerra han dejado de estar bajo la soberanía de los Estados que los gobernaban anteriormente, y que están habitados por pueblos no capacitados aún para dirigirse por sí mismos, en las condiciones extremadamente difíciles del mundo moderno. El bienestar y el desarrollo de estos pueblos forma una misión sagrada de civilización, y conviene incorporar al presente Pacto garantías para el cumplimiento de dicha misión.

«El método mejor de realizar prácticamente tal principio es confiar la tutela de estos pueblos a las naciones adelantadas las cuales, por razón de sus recursos, de su experiencia o de su posición geográfica, están en mejores condiciones de asumir esta responsabilidad, y si consienten en la aceptación,



ejercerán la tutela en calidad de mandatarios y en nombre de la Sociedad.

«El carácter del mandato debe variar según el grado de desarrollo del pueblo, la situación geográfica del territorio, sus condiciones económicas, y todas las demás circunstancias análogas.

«Ciertas comunidades que pertenecían antaño al imperio Otomano han avanzado a un grado de desarrollo tal, que su existencia como naciones independientes puede ser provisionalmente reconocida, con la condición de que los consejos y la ayuda de un mandatario guíen su administración hasta el momento en que sean capaces de conducirse solas.

«Los deseos de estas comunidades desde luego deben tomarse en consideración para la elección de mandatarios.

«El grado de desarrollo en que se encuentran otros pueblos, especialmente los del Africa Central, exige que en dichos pueblos, el mandatario asuma la administración del territorio, en condiciones que garanticen la libertad de conciencia y de religión, sujeta únicamente al mantenimiento del orden público y de la moral, a la prohibición de abusos tales como el comercio de esclavos y el tráfico de armas y alcoholes y a evitar la construcción de fortificaciones y bases militares y navales, así como la instrucción militar de los indígenas como no sea para fines de policía o defensa del territorio, garantizando iguales condiciones para el tráfico y comercio de otros miembros de la Liga.

«En fin hay territorios tales como el Sur-Oeste africano y ciertas islas del Pacífico austral, que a consecuencia de la débil densidad de su población, de su superficie restringida, de su alejamiento de los centros de civilización, de su contigüidad geográfica con el territorio del mandatario, o por otras circunstancias, no podrían estar mejor administradas que por las leyes del Estado mandatario, como parte integrante de su territorio, a reserva de las garantías previstas más arriba, en interés de la población indígena.

«En todos los casos arriba examinados, el mandatario debe enviar al Consejo un informe anual referente a los territorios cuya carga tiene.

«Si el grado de autoridad o de administración que debe ejercer el mandatario no ha sido objeto de una Convención anterior entre los miembros de la Sociedad, será expresamente estatuido sobre estos puntos por el Consejo.



«Una Comisión permanente estará encargada de recibir y examinar los informes anuales de los mandatarios y de dar al Consejo su opinión sobre todas las cuestiones relativas a la ejecución de los mandatos.

El artículo que hemos transcrito establece tres clases de mandatos: A), B) y C). Su distribución y administración corresponde al Derecho Internacional Público, y sólo nos compete estudiar el aspecto de la nacionalidad de los habitantes sometidos a esta institución.

En el mandato de la clase A), hay un reconocimiento provisional como Estados Soberanos e independientes; y pueden, por lo mismo, ser capaces para imprimir una nacionalidad definida a los súbditos respectivos. La ayuda y el consejo del mandatario para guiar la administración no afecta a la nacionalidad. Por ejemplo, los mandatos sobre la Siria y el Líbano no han menguado la nacionalidad propia de los individuos, pues ellos son sirios y libaneses.

El problema existe, dice Caicedo Castilla, cuando se trata de los mandatos de las clases B) y C), y añade:

«En el primero, la potencia mandataria asume la administración del territorio para los numerosos fines que el artículo 22º da a conocer. En el segundo, el país bajo mandato queda en la jurisdicción del mandatario como parte integrante del territorio de éste».

Por esta circunstancia que hace variar el grado y alcance del mandato, es preciso investigar la nacionalidad de los individuos a dicho régimen sometidos. Como no son Estados soberanos y libres, según la acepción que estas expresiones tienen en el Derecho de Gentes, habría error manifiesto al afirmar que sus habitantes tienen una nacionalidad propia.

Tampoco se puede asegurar que ellos sean alemanes por la razón de haber sido los actuales territorios en mandato antiguas colonias alemanas.

Esta solución no se compadecería con el espíritu que primó en el Tratado, cual era el de desnacionalizar al mayor número de alemanes. Además, hay la circunstancia especial de que Alemania, por el artículo 119º, renunció en favor de los aliados y asociados el derecho a sus colonias.

Tampoco hay fundamento, como han opinado algunos autores, para sostener que la nacionalidad de los habitantes es la de la potencia mandataria; y aunque varios publicistas



se inclinan a considerar que los mandatos no son sino ane-  
xiones disfrazadas con cierto formulismo jurídico y misión  
humanitaria, en cambio, por la naturaleza del mandato y  
su finalidad, al menos como aparece escrito en el Tratado,  
no hay base para afirmar que el mandatario imprima su na-  
cionalidad a los habitantes de los diversos territorios.

Se ha creído, por las razones nombradas, que se trata  
de un nuevo estatuto jurídico de nacionalidad, o sea de una  
innovación en el campo del Derecho Civil Internacional.

El Consejo de la Sociedad de las Naciones, en 1923,  
dió al respecto las siguientes resoluciones:

«1ª. El estatuto de los habitantes indígenas de un te-  
rritorio bajo mandato es distinto de aquél de los nacionales  
de la potencia mandataria, y no puede ser asimilado a ese  
estatuto por ninguna medida de carácter general.

»2ª. Los habitantes indígenas de un territorio bajo man-  
dato no adquieren la nacionalidad de la potencia mandataria,  
por consecuencia de la protección que los beneficia.

»3ª. No es contrario a los principios anteriores el hecho  
de que los habitantes de un territorio bajo mandato, puedan,  
por un acto individual de su voluntad, obtener por natura-  
lización la nacionalidad de la potencia mandataria, conforme  
a las medidas que las potencias mandatarias expidan a este  
respecto en su legislación.

»4ª. Es de desear que los habitantes indígenas que se  
benefician con la protección de una potencia mandataria, sean  
designados, en lo que concierne a cada mandato, por una  
denominación que precise claramente su estatuto, bajo el ré-  
gimen del mandato».

Francia acogiéndose a la última regla ha denominado  
a los habitantes de los territorios colocados bajo su mandato  
con el nombre de *administrados franceses*.

Estas resoluciones no han definido en forma concreta  
el llamado nuevo estatuto de nacionalidad. Se limitan a ma-  
nifestar que no es extraño el que los habitantes puedan, por  
naturalización, adquirir la nacionalidad de los Estados man-  
datarios, facultándoles así para emplear todo medio encami-  
nado a nacionalizar las antiguas colonias alemanas.

Este aspecto, por tal razón, no está suficientemente es-  
clarecido en el Derecho Civil Internacional. Hay individuos  
cuya nacionalidad es incierta ya que, no teniendo la nacio-  
nalidad del territorio por no formar éste un Estado, en la ver-



dadera acepción de la palabra, y no aceptando por naturalización la nacionalidad del mandatario, serían apátridas, a pesar de la encomienda de que dichos habitantes sean designados, en cada caso, con una denominación que precise su estatuto.

El sentido de las resoluciones, su eufemismo y la forma superficial de tratar el problema han conducido a algunos autores a confirmarse en su opinión de que si el tratado no quiso hablar de anexiones, fué únicamente para evitar poner de relieve el fin que persiguieron los negociadores de la paz. Pero en el terreno de los hechos la anexión existe con el nombre de misión civilizadora, y tanto más cuanto que, en materia de nacionalidad lo único que aparece en claro de las resoluciones del Consejo, es la facultad plena concedida a los mandatarios, para crear vínculos que conduzcan más tarde a la anexión verdadera.

No de otra manera se explica la dubitación de dichas resoluciones que dicen, por un lado, que el estatuto de los habitantes indígenas no es el de la potencia mandataria, y que silencian, por otro, de afirmar categóricamente cuál sea ese estatuto. En consecuencia, no vemos la *nueva figura jurídica* o el *nuevo estatuto* que se dice ha venido a enriquecer la terminología del Derecho Internacional Privado.

ÁREA HISTÓRICA  
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL

13.—PÉRDIDA Y READQUISICIÓN DE LA NACIONALIDAD.—  
Habiendo anteriormente sentado reglas concretas en esta materia cabe ya, con mayor facilidad, tratar del aspecto de la pérdida y de la readquisición de la nacionalidad.

Hemos visto que este vínculo una vez adquirido por uno de los sistemas de imposición legal, puede ser renunciado por el individuo que quiere acogerse a otro distinto. Esta es la solución del sistema liberal moderno, pero no siempre ha sido reconocida, porque han prevalecido determinadas ideas en relación con el grado de progreso y de las preocupaciones de cada época.

Y así como al estudiar el fundamento de la nacionalidad, nos referimos a los sistemas relacionados con los rasgos peculiares de cada período histórico, de la misma manera al tratar de la pérdida, tenemos que considerar también los sis-



temas correspondientes a los diversos grados de la evolución jurídica.

El primero se vincula al período de la sujeción perpetua del individuo al Estado. Fué admitido en un tiempo en que el vasallaje dió un especial matiz a las instituciones jurídicas. Conforme a este sistema, la nacionalidad no podía perderse en ningún caso; y la voluntad individual no era capaz para destruir un hecho tan complejo como la nacionalidad, no entendida en esos tiempos como mero vínculo de subordinación política sino como calidad determinada por factores específicos como la herencia, la raza, el nacimiento, la lengua, etc. La nacionalidad era la *patria* y los rasgos distintivos de la patria, no podían perderse ni renunciarse, ni la voluntad del hombre modificarlos. Inglaterra abandonó este sistema en 1870.

El segundo pertenece a la época moderna y admite que la nacionalidad, entendida como vínculo de subordinación política, tal como la acepta la doctrina hoy generalmente seguida, puede perderse por el hecho o por la voluntad del individuo.

Ahora bien, estando la Doctrina y las legislaciones de acuerdo con el postulado anterior, es, sin embargo, imposible señalar una regla rígida que determine los casos por los cuales se pierde la nacionalidad. Es preciso consultar las legislaciones. Las hay algunas que establecen requisitos especiales, y hasta determinan la pérdida como sanción de la ley. Casi todas admiten la extinción del vínculo a causa de la naturalización, comprobando previamente que este hecho hace perder la de origen o que, en su caso, el individuo la renuncia para acogerse a una nueva.

Un sistema intermedio se orienta a sostener que la nacionalidad no se pierde aunque se pueda perder el ejercicio de ciertos derechos que le son correlativos.

También incurre en el error de confundir la nacionalidad con la patria; pues, la pérdida del ejercicio de ciertos derechos es prácticamente pérdida de la nacionalidad.

Un último sistema admite que la nacionalidad se pierde mientras el individuo está vinculado al país cuya subordinación ha adquirido, pero en el caso de retorno a la patria de origen, para mantener en ésta una permanencia por tiempo fijo, se concluye que la nacionalidad perdida renace con todos sus derechos y deberes correlativos. Este sistema, si bien



concretado en algunos tratados como entre Estados Unidos y Alemania, entre Austria y Bélgica, etc., tiene un inconveniente que afecta a la necesidad de la permanencia jurídica y a la fijeza de un estatuto personal.

Supongamos que un individuo ha perdido su nacionalidad de origen por naturalizarse en el Ecuador. Desde el momento de la naturalización es ecuatoriano, y si torna a su país de origen readquiere su anterior nacionalidad perdiendo la ecuatoriana, sobre todo, pongamos por caso, si el efecto de la recuperación se hace depender de la residencia por un tiempo fijo. En este caso es una sola voluntad la que hace desaparecer un nexo contractual en mengua de todos los principios ya estudiados. El Estado que ha concedido la *carta*, no interviene para nada en la desnacionalización, cosa un tanto absurda ya que muchas veces una readquisición de nacionalidad, rompiendo un vínculo adquirido por naturalización, puede hacerse y de ordinario se hace con fraude de la ley.

¿Podremos admitir en el terreno de los principios una conclusión semejante? Parece indispensable concretar para la pérdida de la nacionalidad el mismo principio que para su adquisición, o sea voluntad manifiesta del Estado y del individuo, de modo que si un acuerdo de voluntades constituye el vínculo, el mismo acuerdo debe darlo por extinguido. En caso contrario, la naturalización dependería de las veleidades de los individuos y quedaría siempre burlado un acto del Poder Público. La nacionalidad se readquiere conforme a la ley; pero la readquisición hay lugar a estudiarla considerando al individuo libre y a los individuos legalmente dependientes de otros, como la mujer y los hijos.

En el primer caso varían las condiciones establecidas por las leyes de cada país; en el segundo, si la mujer viuda o divorciada no perdió su nacionalidad original, no se presenta problema alguno. Tiene esa nacionalidad hasta el momento que su libre deliberación contribuya a operar el cambio.

Si la mujer perdió su nacionalidad a consecuencia del matrimonio, la disolución de éste debiera producir el efecto de colocarla en su situación inmediatamente anterior, más las legislaciones condicionan de ordinario este hecho a circunstancias especiales, como la conservación o no del domicilio en el territorio de la nacionalidad originaria, etc.

Como quiera que se recupere la nacionalidad, dice Alcorta, los efectos que se producen son los siguientes:



1.º Igualdad de situación con respecto a los demás nacionales;

2.º Nueva nacionalidad efectiva desde el momento de la readquisición, sometiendo los actos anteriores a la nacionalidad del tiempo en que sucedieron; y

3.º Los hijos conservan la condición que tuvieron en el momento en que la recuperación se operó, con la libertad posterior del derecho de optar.

Algunos autores hablan también de la caducidad de la nacionalidad, pero creemos que este aspecto es propiamente aplicable a la naturalización, como cuando algunas legislaciones establecen las formas o procedimientos para dejar sin efecto la carta que los Estados conceden a los individuos.

14.—LA NACIONALIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS.— Este estudio lo haremos desde tres puntos de vista: de la doctrina, de la legislación y de la jurisprudencia.

En la doctrina—Expondremos las principales teorías que se han presentado al respecto, comenzando por la de la *sede social*.

Según Gain, debe entenderse por sede social el lugar donde se encuentran centralizados todos los servicios de la empresa, o sea, donde, en cierto modo, reside el cerebro de la sociedad y de donde parten las órdenes y los impulsos de dirección. Según esta teoría una empresa o sociedad tendrá, pues, la nacionalidad del lugar en que se encuentra la sede jurídica.

Dos objeciones fundamentales se han hecho contra esta teoría: 1ª. El fácil cambio de la sede de un lugar a otro; 2ª. Su imposibilidad de determinación, en varios casos. La primera objeción revela que la nacionalidad así establecida no sería fija; y la segunda, que trata de determinar, como así es en realidad, que los actos constitutivos de la sede social pueden verificarse en varios países.

Arminjón, propone para solucionar estas dificultades la interpretación de la voluntad de los fundadores, para concretar con certeza la sede porque, dice, conviene que se pon-



ga en juego la autonomía de las partes para determinar por este solo medio la nacionalidad que se ha querido imprimir a los seres de razón.

El señor Osuna Gómez, en un importante trabajo titulado *De la Nacionalidad de las personas jurídicas y de su condición en el extranjero*, al estudiar la teoría, dice lo siguiente:

«La teoría de la sede social además, no la hemos preferido únicamente haciendo un balance comparativo de ventajas y desventajas de todas las soluciones; esta preferencia se debe a ser una solución tan jurídica como lógica, tal como lo hemos visto. Esta conveniencia de la teoría de la sede social, se pondrá más de manifiesto con la exposición de algunas cuestiones relacionadas con la nacionalidad de las sociedades. Los tribunales se han pronunciado en este sentido con rara uniformidad. En los países donde no existían disposiciones expresas sobre esta materia la jurisprudencia sentó el precedente de la determinación de la nacionalidad de las sociedades por el lugar de la sede social. Es el criterio que se debe aplicar hoy en los países cuyas legislaciones son deficientes para llenar los vacíos que dejaren en la resolución de este problema».

Varios autores admiten como más conveniente el sistema que estudiamos, pero nuestro punto de vista, como indicamos antes, es el de no aceptar la nacionalidad para las personas jurídicas, porque no la necesitan. Lo que les hace falta es solamente un estatuto aplicable y discutir cuál sea el mejor estatuto, en el terreno de los principios jurídicos no es, en nuestro concepto, tratar de buscar razones o circunstancias constitutivas de nacionalidad.

La práctica ha suministrado la suficiente experiencia para concluir en este sentido. Pues, de los casos en que los tribunales han fallado acerca de la nacionalidad de las personas jurídicas, se desprende con sobrada claridad cuál ha sido el sinnúmero de dificultades que, de ordinario, han conducido a soluciones contradictorias, imposibles de prestarse a una generalización científica.

Otro de los sistemas sustentados es el de la nacionalidad de los socios para deducir, por élla, la nacionalidad de la empresa. Toda persona jurídica es distinta de los elementos que la componen y si se admite esta regla, aparece ilógico derivar una consecuencia jurídica de un supuesto falso.



Además, los individuos varían frecuentemente de subordinación; y estas variantes ocasionarían la inestabilidad de la sociedad, en cuanto a su reglamentación jurídica. Las dificultades subirían de punto tratándose por ejemplo, de las compañías anónimas en que las acciones se transfieren por la mera entrega del título. Esta facilidad de transferencia, haría cambiar de un momento a otro la nacionalidad de los tenedores y, por lo mismo, la nacionalidad de la empresa.

Durante la guerra europea volvió a aplicarse por los tribunales de los diversos Estados la teoría de la nacionalidad de las sociedades fundada en la nacionalidad de la mayoría de los accionistas. Se recurrió a esta medida, por la circunstancia de tener que practicar represalia o retorsión y justificar jurídicamente la liquidación de compañías que, habiendo gozado hasta entonces de una protección reconocida, se juzgó, sin embargo, que servían los intereses de los países enemigos.

La teoría del domicilio que por muchos autores ha sido acogida como de mayor valor jurídico, consiste en determinar la nacionalidad de una compañía o empresa por el lugar en que se encuentra domiciliada.

Pero el domicilio puede ser entendido en dos aspectos distintos: o es ya la sede social, administrativa, a que nos hemos referido antes, o ya el centro de explotación de los negocios. Una y otro pueden variar con facilidad y operar el cambio de nacionalidad, aparte de que, de ordinario, una misma empresa puede tener varias sedes y varios centros de explotación. En tal caso, la empresa o sociedad de que se trate tuviera múltiples nacionalidades, dando lugar a graves conflictos.

Weiss cree que el domicilio ha de ser el lugar del principal establecimiento. No acepta la teoría de la sede social y justifica la del centro de explotación. «Es necesario, dice, que la nacionalidad de una sociedad no se ligue a circunstancias o hechos que dependen exclusivamente de la voluntad del hombre, como la fijación del centro de la administración social. De otro modo los fundadores podrían someterse o escapar a las disposiciones restrictivas de la ley.»

La teoría del lugar en que se ha constituido la sociedad, hace que ésta adquiera la nacionalidad de ese lugar. Se asimila al *jus soli* de las personas físicas, ya que una entidad moral sólo nace legalmente cuando se ha constituido conforme



a derecho y es, entonces, la ley de la constitución la única aplicable. Pero, volvemos a las dificultades anteriormente expuestas, sobre todo si se considera cuál ha de ser la ley de la constitución. Para unos autores esa ley es la sede jurídica; para otros, el centro de explotación. El sistema, sin entrar a calificar todos estos particulares, deja margen a diversas interpretaciones y no se traduce, por lo mismo, en una certidumbre jurídica.

Para Pillet, por ejemplo, la nacionalidad de una empresa, es la de su sede social; por ser ésta el estatuto jurídico de la constitución.

El sistema adolece, pues, de imprecisión y se debe a esta circunstancia el que varios autores la combatan desde diversos puntos de vista.

**En la Legislación.**—Siguen el sistema de nacionalidad por el domicilio los siguientes países: Panamá, Guatemala, España, entre otros, haciéndose necesario advertir que hay países que admiten el domicilio como estatuto de aplicación, sin reconocer propiamente una nacionalidad para las personas jurídicas. Pueden citarse entre éstos, Colombia y Costa Rica. Otros admiten la teoría de la sede social, como Venezuela, Turquía, Suiza, Rumania, Italia. Y se fundan en el sistema de la ley de la constitución, México, Rusia y Francia, según se desprende de algunos fallos de sus tribunales. El Ecuador no tiene disposiciones concretas al respecto; y sólo una ley reformativa del Código de Comercio estableció que las compañías que actúen en el Ecuador deben tener un apoderado legítimamente constituido, y que represente en debida forma a la sociedad en todos los actos propios de sus actividades.

**En la Jurisprudencia.**—Durante el curso de la guerra mundial, y en la post-guerra, se modificaron los sistemas legislativos de varios países beligerantes, y la jurisprudencia tuvo que adaptar sus resoluciones a los intereses de cada uno de ellos. Caicedo Castilla hace notar que la modificación se debió a ciertas medidas como la de decretar el secuestro de los bienes de las sociedades enemigas. Al aplicar el secuestro se constató que muchas empresas que hasta ese momento habían sido consideradas como nacionales de los Estados en que se encontraban domiciliadas, servían en realidad intereses enemigos por estar controladas por capitalistas per-



tenecientes a los países entre los que se declaró la beligerancia.

Surgió, de este modo, la *teoría de la interpuesta persona*, que no fué sino una aplicación del derecho civil, ya que en éste existen algunas disposiciones que conducirían a sentar la siguiente regla: *Cuando la ley establece una prohibición o reviste de alguna incapacidad a cualquiera persona, los actos no pueden convaler porque un tercero interpuesto, legalmente capaz, asome como beneficiario en fraude de la ley.*

El incapaz, por ejemplo, no puede recibir una asignación y el Código Civil establece que será nula la que se haga a un incapaz, aunque se disfrace bajo la forma de un contrato oneroso o por *interposición de personas*. De la misma manera en el mandato hay una disposición que prescribe que el mandatario no puede por sí ni por *interpuesta persona* comprar las cosas que el mandante le ha ordenado vender ni vender de lo suyo al mandante lo que éste le ha ordenado comprar. En los casos de interposición, el incapaz es el beneficiario real y el interpuesto, un beneficiario aparente.

La Corte de Lyon aplicando esta teoría distinguió entre *empresa y sociedad*. La empresa, dijo, es agrupación de capitalistas que se propone obtener un objetivo industrial. Esa agrupación necesita para actuar, de una investidura jurídica que es propiamente la sociedad. Cuando los capitalistas alemanes actúan mediante una sociedad de forma francesa, este ser jurídico es una interpuesta persona entre la empresa y los individuos que se ponen en contacto con ella. De aquí que, en todos los casos en que las sociedades francesas funcionaban como interpuestas personas, se procedió al secuestro de sus bienes; y eran interpuestas, siempre que los empresarios fuesen alemanes o el capital proviniese de un país enemigo, sirviendo directamente los intereses de las naciones con las que Francia sostenía la guerra.

La diferencia entre empresa y sociedad es bastante forzada. Toda empresa se identifica con el organismo jurídico por medio del cual actúa. No hay base para mantener tal distinción y la teoría de la interpuesta persona, tal como fué aplicada por los tribunales, no es sino una de las tantas medidas de represalia que fueron tomadas por los Estados aliados y asociados durante la guerra y que tuvieron su máxima consagración en el Tratado de Versalles de 1919. Jurídicamente esta teoría contradice los más elementales principios



del derecho y posteriormente se la abandonó para preferir, ya el sistema de domicilio, o ya el de la nacionalidad de la mayoría de los socios.

Una sociedad de explotación carbonera, tenía su sede en Marsella. Se componía de trescientas acciones, correspondiendo las ciento cincuenta y cinco a tenedores franceses. Era una sucursal de la Deutche Kohler Depot, de Hamburgo. Aquí tendríamos algunos elementos a favor de la nacionalidad francesa, como el domicilio y la nacionalidad de la mayoría de los accionistas. La Corte de Aix, declaró que esta sociedad era alemana, por cuanto su objetivo directo era la importación y venta del carbón alemán en Francia. El tenedor francés resultaba ser, pues, un tenedor ficticio.

En Inglaterra se presentó también el caso de la Continental Tyre and Rubber Cy, anónima y cuya actividad era la de vender neumáticos fabricados en Alemania por la Casa matriz. La Corte de Londres, fundándose en la teoría del domicilio, declaró que era una sociedad inglesa, pero la Cámara de los Lores, reviendo este fallo, dijo que era alemana, acogiendo el criterio de la nacionalidad de la mayoría de los socios, puesto que veinte y cuatro mil acciones estaban en poder de tenedores alemanes.

Estados Unidos no se apartó de su sistema legislativo, y en el caso de la sociedad Fritz Schultz y Cía., domiciliada en Nueva York y cuya mayoría de accionistas era alemana, fué declarada americana, por cuanto, se dijo, la sociedad es una persona jurídica distinta de los individuos que la componen y la nacionalidad de éstos no puede influir en la de aquélla.

Por lo que hemos expuesto, de modo muy sumario, podemos darnos cuenta cabal de la diversidad de criterios que prevalecen en la materia de la nacionalidad de las personas jurídicas. Esta diversidad emana, en nuestro concepto, del error de haber querido mantener un vínculo de subordinación política para las entidades morales. No hay personas jurídicas nacionales ni extranjeras porque toda persona jurídica no es sino una forma colectiva de actividad en el campo del derecho, y lo que requieren es simplemente un estatuto aplicable y éste no puede ser otro que el del domicilio, entendido como el del lugar de la sede originaria jurídica de la empresa, sede que es, a su vez, la ley de la constitución.



15.—LA NACIONALIDAD EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA.—El Derecho Constitucional Histórico.—¿Qué sistema ha sido seguido por nuestra legislación para determinar la adquisición originaria de la nacionalidad? La Constitución colombiana de 1821 dió la calidad de colombianos a los hombres libres nacidos en el territorio de Colombia y a sus hijos; a los residentes en Colombia al tiempo de su transformación política, siempre que permanezcan fieles a la causa de la independencia y a los no nacidos en Colombia que obtengan carta de naturaleza. En consecuencia, durante el tiempo que el Ecuador perteneció a la Gran Colombia se fijó el *jus soli* para la adquisición originaria y se reconoció la naturalización como medio de adquisición derivativa.

La primera Constitución de 1830 hizo mayores especificaciones en esta materia. Determinó los colombianos por nacimiento y por naturalización. Tocante a los primeros se mantuvo el *jus soli*. Respecto de los segundos se los clasificó en cuatro categorías: 1ª. No nacidos en Colombia, pero residentes en este territorio al tiempo de la transformación política.—2ª. Hijos de padre o madre colombianos nacidos fuera de Colombia, siempre que vinieren a residir en la República y manifestaren su voluntad de ser colombianos.—3ª. Los extranjeros que se naturalizaren.—4ª. Los extranjeros que hubieren prestado servicios importantes a la República.

La segunda Constitución de 1830, primera de la República, concretó en el artículo 9º. la calidad de ecuatorianos, a los siguientes: a los nacidos en el territorio y sus hijos, a los naturales de los otros Estados de Colombia avecindados en el Ecuador, a los militares que estuvieren en servicio del Ecuador al tiempo de declararse en Estado independiente, a los extranjeros que fuesen ciudadanos en la misma época, a los extranjeros que se naturalizaren y a los naturales que habiéndose domiciliado en otro país vuelvan y declaren ante la autoridad que desean recuperar su antiguo domicilio. Como se ve estas disposiciones son un tanto oscuras por el empleo de palabras que tienen otra significación en el Derecho Civil Internacional.

En las Cartas de 1835 y 1834, se empleó con ligeras variantes la misma redacción que en la de 1830.

La Carta de 1845 contiene una innovación que es la del numeral 3º. del artículo 6º. que considera como ecuatorianas



por naturalización a las mujeres extranjeras desde que se hayan casado o se casaren con ecuatorianos.

Las Cartas de 1850, 1852, 1861, 1869, 1878, 1883, 1897, siguen empleando el sistema de dividir a los ecuatorianos en dos categorías: por nacimiento y por naturalización.

La Constitución de 1928-29, hizo una enumeración detallada al tratar de los ecuatorianos en el Título II. Dijo: son ecuatorianos de nacimiento los nacidos en el territorio de la República; y el artículo 8º. prescribió que se han de reputar también ecuatorianos de nacimiento, los siguientes: los hijos nacidos en el extranjero de padre o madre ecuatorianos de nacimiento, cuando cualquiera de ellos se hallare en servicio de la República o emigrado, los nacidos en el extranjero de padre o madre ecuatorianos de nacimiento que vinieren a residir en la República o expresaren su voluntad de ser ecuatorianos.

El artículo 9º. consideró además como ecuatorianos a los que hubieren obtenido esta calidad del Congreso, por servicios relevantes prestados al país, a los extranjeros que se naturalizaren, habiendo residido un año en la República, a los hijos de extranjeros naturalizados, mientras permanecieren bajo la patria potestad y posteriormente, si llegados a la mayor edad no renunciaren expresamente la calidad de ecuatorianos, a la mujer extranjera casada con ecuatoriano, y a la mujer extranjera viuda de ecuatoriano, cuando no manifestare voluntad contraria, y a los indolatinos, siempre que hubieren fijado su residencia en el Ecuador y manifestado su voluntad de ser ecuatorianos.

**La Constitución vigente.**—La Carta constitucional de 1906 inmediatamente anterior a la de 1928—29, fué declarada vigente a raíz de la inauguración del Gobierno que se proclamara el 26 de Setiembre de 1935. Estudiemos en esta Constitución todo lo relacionado con la nacionalidad.

El artículo 9º. establece la nacionalidad por el nacimiento y por la naturalización. Son ecuatorianos por nacimiento: los nacidos en el territorio del Ecuador de padre o madre ecuatorianos; los nacidos en el mismo territorio de padres extranjeros que residan en él y los nacidos en el Ecuador de padres desconocidos.

El artículo 11º prescribe que para los derechos que la Constitución acuerda se considerarán como ecuatorianos por



nacimiento, los que habiendo nacido en suelo extranjero de padre y madre ecuatorianos por nacimiento, vinieren a residir en la República y expresaren su voluntad de ser ecuatorianos.

El 13 de abril de 1936 se expidió un Decreto reformativo de la Constitución, para dar en en élla cabida a un inciso que constó ya en la Carta de 1928-29 y que daba la calidad de ecuatorianos a los que habiendo nacido en suelo extranjero de padre o madre ecuatorianos de nacimiento vinieren a residir en la República o expresaren su voluntad de ser ecuatorianos.

A primera vista parece que no hay ninguna diferencia entre el artículo 11º de la Constitución vigente y el texto del Decreto reformativo, pero observándolo bien, la Constitución que hoy rige fué demasiado exigente para dar nacionalidad a los nacidos en el extranjero, pues requería que el padre y la madre sean ecuatorianos de nacimiento. La reforma contempla sólo el caso de la ecuatorianidad para el padre o para la madre.

Son ecuatorianos por naturalización: los naturales de otra nación que estuvieren en el goce de la nacionalidad ecuatoriana, los extranjeros que profesan ciencia, arte o industria útil o que sean dueños de propiedad raíz o capital en giro y que habiendo residido un año en la República, declaren su propósito de avecindarse en élla, y obtengan carta de naturalización, los que la obtengan del Congreso por haber prestado servicios relevantes a la nación, los hijos de extranjeros naturalizados mientras permanezcan bajo la patria potestad y después, cuando llegados a su mayor edad no renuncien expresamente la naturalización, y la mujer extranjera viuda de extranjero naturalizado en la República, mientras no manifieste voluntad contraria.

Nada se dice de la pérdida y de la readquisición de la nacionalidad. En la Constitución de 1928-29, habían dos disposiciones al efecto. La naturalización en otro Estado, el servicio en nación enemiga y la cancelación de la carta eran los motivos de pérdida de la nacionalidad, manifestándose que ésta podía recobrase con arreglo a la ley.

Como se ve, la Constitución vigente tiene como sistema esencial el jus soli, completado con el jus sanguinis para los nacidos en el extranjero, hijos de padre o madre ecuatorianos de nacimiento.



La ley de extranjería, extradición y naturalización.—En el curso del presente año esta ley será objeto de importantes modificaciones que consulten las nuevas necesidades, tanto en lo que se refiere a la entrada de extranjeros como a los especiales requisitos que deben reunir para obtener naturalización en el Ecuador.

El capítulo VII de la actual ley trata de la naturalización, estableciendo el siguiente sistema: se concede la carta por el Poder Ejecutivo, una vez que el solicitante ha presentado ante el Gobernador de la respectiva provincia un memorial en el que conste de qué Estado es nativo y el número, nombres, edad y sexo de las personas a quienes quiera hacer extensiva la naturalización. Debe también comprobar su buena conducta y la residencia, por el tiempo que exige la Constitución.

Determina, además, el procedimiento por el cual el interesado debe comprobar que por el hecho de adquirir la nacionalidad ecuatoriana pierde su anterior subordinación y la constancia de la renuncia cuando la ley extranjera así lo exija.

Una vez obtenida la carta, ésta puede anularse de pleno derecho, cuando por alguna circunstancia se comprobare que ha habido fraude de la ley.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Dirección General de Registro Civil inscriben estas naturalizaciones en un libro especial.

Interesa considerar cómo la naturalización puede también afectar a otras personas, según el sistema de nuestra ley, y el artículo 71 dice así: «En persona del marido quedan naturalizados su mujer y sus hijos menores, salvo el derecho de opción que corresponde a éstos al llegar a los 21 años». Esta disposición, en verdad, encierra la naturalización colectiva de la familia que prácticamente no existe sino en limitado número de legislaciones. El que la naturalización del marido comprometa a la mujer, así en forma imperativa y obligatoria, es muy difícil de aceptar, pues, hemos insistido ya que la mujer tiene el derecho de opción, así como los hijos a partir de su mayor edad.

Si conforme a la ley de la mujer, el matrimonio con un extranjero le hace perder la nacionalidad para seguir la del marido, la mujer, en cambio, no puede naturalizarse *ipso jure*, para tomar la nacionalidad que escoja el marido. La natu-



ralización colectiva de la familia no es recomendable por la doctrina.

Por otro aspecto, la disposición de la ley ecuatoriana puede dejar a la mujer apátrida y en ocasiones, con doble nacionalidad. Supongamos que conforme a la ley de la mujer ésta conserve su nacionalidad a pesar del matrimonio con un extranjero. La naturalización posterior del marido bajo una ley que ordenara la nacionalización colectiva, produciría en la mujer un cúmulo de nacionalidades excluyentes.

El artículo 72 estatuye que la extranjera mujer de un ecuatoriano, sigue la nacionalidad del marido, si establece su domicilio en el Ecuador y si según sus leyes no conserva la anterior nacionalidad. Esta disposición es muy plausible pero comparada con la anterior resulta contradictoria. Si según su ley, la mujer no pierde su nacionalidad propia en virtud del matrimonio, en cambio, en virtud de la naturalización, queda de hecho con la nacionalidad del marido.

El artículo 73 prescribe que la ecuatoriana que se casa con un extranjero pierde su nacionalidad para seguir la del marido desde que sale del Ecuador, pero mientras reside en el territorio de este Estado, conserva su calidad de ecuatoriana.

El artículo 74 se refiere a la mujer ecuatoriana que se casa con un extranjero, cuando según la ley de éste no adquiere su nacionalidad. En este caso la mujer no pierde su nacionalidad ecuatoriana, aún cuando resida o se domicilie fuera del Ecuador.

El artículo 75 establece que la mujer ecuatoriana que por el hecho del matrimonio ha adquirido la nacionalidad extranjera, puede recuperar su calidad de ecuatoriana cuando enviude, si hace constar esta voluntad ante un Agente diplomático o consular ecuatoriano.

Estas son las principales disposiciones de nuestra ley de naturalización.

**El Código Bustamante.**—El numeral I del artículo 3º. de este Código dice que las leyes que se aplican a las personas en razón de su domicilio o de su nacionalidad y las siguen aunque se trasladen a otro país, denominadas personales, son de orden público interno.

El artículo 4º. añade que los preceptos constitucionales son de orden público internacional.



Según estas disposiciones, un sistema que fija una nacionalidad tiene que prevalecer contra cualquiera ley extranjera. De aquí la imposibilidad de neutralizar los efectos de leyes opuestas fundadas en diversos sistemas y eliminar los conflictos de leyes, ya que si el *jus soli*, aceptado por casi todos los Estados americanos, es de orden público internacional, no podrá declinar frente a otra ley y se presentarán los casos de doble nacionalidad. Por ésto aspiraríamos a que la doctrina moderna concrete el siguiente principio: *en todos los casos en que por oposición de sistemas en las leyes de los diversos Estados se presenten conflictos de nacionalidad porque dos soberanías demanden al mismo tiempo las exigencias de subordinación política con respecto a un individuo determinado, la soberanía en la cual existan menos elementos de vinculación deberá ceder en favor de aquélla que reúne el mayor número de estos elementos, porque existe la imposibilidad jurídica de la doble nacionalidad.*

Como puede observarse, el reconocimiento de las mayores vinculaciones en un territorio determinado es, a la vez, interpretación presuntiva de la voluntad individual, aún cuando creamos que al sostener la regla expuesta, ésta no pasará de principio, porque es indispensable que un tratado, que juega el papel de ley internacional, reconozca el principio para darle fuerza de derecho positivo.

ÁREA HISTÓRICA  
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL

16.—LA NACIONALIDAD EN LAS CONFERENCIAS INTERNACIONALES AMERICANAS.—Moreno Quintana, al referirse a la aceptación uniforme del *jus soli* por los Estados americanos, dice:

«Estabilizada la independencia de cada uno de los países americanos fué su primera preocupación el establecimiento de una Constitución que resumiera sus aspiraciones políticas y sus intereses sociales. Y dictadas éstas en consonancia con tales finalidades, sustentaron en su gran mayoría el principio del *jus soli* como el más adecuado para promover el progreso americano. Se produjo así una vez reconocidos los nuevos Estados por los del antiguo mundo, el fundamental conflicto doctrinario y político en la materia de la nacionalidad. Poco



a poco fué organizándose entre unos y otros Estados un régimen convencional para regir sus comunes relaciones y en el cual los tratados celebrados fueron su expresión más acabada. El imperio del *jus soli* fué aceptado paulatinamente por varios países europeos afirmando de este modo las relaciones entre ambos continentes.»

El autor citado anota con acierto un hecho revelador de los caracteres sociológicos especiales del continente americano, formado por la inmigración europea. Esos caracteres exigieron la aceptación del *jus soli*, para nacionalizar a los hijos de los inmigrantes nacidos en los territorios de América. Pero esta situación dejó frente a frente dos sistemas: el *jus soli*, americano y el *jus sanguinis*, europeo; y si bien es verdad que algunos tratados surgidos de las Conferencias Internacionales y celebrados también con países de Europa, aceptan en parte el *jus soli*, en cambio, no nos inclinamos a sostener que se hubiera logrado una equivalencia perfecta entre el viejo y el nuevo mundo.

El resultado obtenido ha sido muy escaso en esta parte y queda mucho que elaborar todavía para lograr el funcionamiento normal de los sistemas de modo que ellos en vez de producir conflictos faciliten la actividad jurídica de las personas que necesitan libertad, garantía y eficacia.

No ha sucedido lo mismo entre los países del continente americano, pues la obra realizada por las Conferencias Panamericanas ha sido de alta significación para el Derecho Privado Internacional, habiéndose facilitado la labor por el antecedente de que las Constituciones americanas ya tenían el *jus soli* definitivamente consagrado como medio de adquisición originaria de la nacionalidad.

En la tercera Conferencia una de las Convenciones trató de la condición de los ciudadanos naturalizados que retornan a su país de origen. Se estableció que el retorno les hacía perder su nacionalización y readquirir su primitivo origen.

Esta Convención fué ratificada por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Honduras, Méjico, Nicaragua y Panamá.

Para el programa de la quinta Conferencia el Uruguay sugirió un tema que se encaminaba a dar nacionalidad americana a todo hijo de extranjero nacido en el continente, salvo que llegando a la mayoría de edad y encontrándose en el país de origen expresara su deseo de optar por la nacionalidad de



éste. Esta proposición fué estudiada por el Congreso de Jurisconsultos de Río de Janeiro en 1925 y se prefirió considerar algunos artículos análogos del Proyecto de Codificación de Alejandro Alvarez que trataban sobre nacionalidad.

En estos artículos se concretaron los siguientes principios:

1º.—Los individuos nacidos en el territorio de un Estado americano son nacionales de dicho Estado, cualquiera que sea la nacionalidad de sus padres.

2º.—Los otros casos de adquisición y de pérdida de la nacionalidad se regirán por las disposiciones de las Constituciones o de las leyes de los países respectivos.

3º.—No podrá otorgarse la naturalización en un país americano si el extranjero que la pretende no prueba antes que por élla pierde su nacionalidad de origen.

4º.—Se considera que ha renunciado a la naturalización y que ha adquirido de nuevo su nacionalidad de origen toda persona que vuelva al Estado de que es originario, para fijar allí su residencia con la intención de no regresar al Estado donde se naturalizó. Se presume que no tiene intención de volver al Estado en que se naturalizó, la persona que reside en el país de origen más de dos años.

Estas disposiciones prueban que la obra realizada en América ha dado un valioso aporte a las normas jurídicas que rigen la nacionalidad.

Tocante a la última regla que da efecto de caducidad a una carta de naturalización por el retorno al país de origen y una residencia por tiempo fijo en este último, hemos tenido oportunidad de analizarla anteriormente.

17.—ALGUNOS ASPECTOS DE LA NACIONALIDAD EN EL DERECHO COMPARADO.—A manera de referencia, y por considerar este aspecto de utilidad, insertamos aquí algunos tópicos de la nacionalidad comparativamente en varias legislaciones de Europa y América, tomando como base las importantes obras de Moreno Quintana y Bourbousson, para finalizar así el presente capítulo.



PAÍSES AMERICANOS QUE DETERMINAN  
EL JUS SANGUINIS:

Méjico.

PAISES AMERICANOS QUE DETERMINAN  
EL JUS SOLI:

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador,  
Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay,  
Perú, Santo Domingo, Uruguay y Vene-  
zuela.

TIENEN NACIONALIDAD OPTATIVA DEL  
JUS SANGUINIS:

a) Por mera manifestación de voluntad:  
Argentina y Nicaragua;

b) Por domiciliarse en el país: Bolivia,  
Brasil, Chile, Guatemala, Paraguay, Santo  
Domingo;

c) Por domiciliarse y hacer manifestación  
de voluntad: Ecuador y Panamá;

d) Por inscribirse en un registro cívico:  
Perú;

e) Por domiciliarse e inscribirse: Uru-  
guay.

SIGUEN EL SISTEMA MIXTO:

Colombia, Costa Rica, Cuba, Estados Uni-  
dos, Haití, Honduras y El Salvador.

EN MATERIA DE NATURALIZACION, SI-  
GUEN EL SISTEMA INDIVIDUAL Y VO-  
LUNTARIO:

Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cos-  
ta Rica, Cuba, El Salvador, Estados Uni-  
dos, Guatemala, Haití, Honduras, Nicara-  
gua, Panamá, Paraguay, Perú y Santo  
Domingo.



NATURALIZACIÓN POR EL MINISTERIO  
DE LA LEY:

Brasil, Méjico y Uruguay.

NATURALIZACIÓN COLECTIVA DE LA  
FAMILIA:

Ecuador, Brasil, Venezuela.

NACIONALIDAD ORIGINARIA DE LA MU-  
JER CASADA:

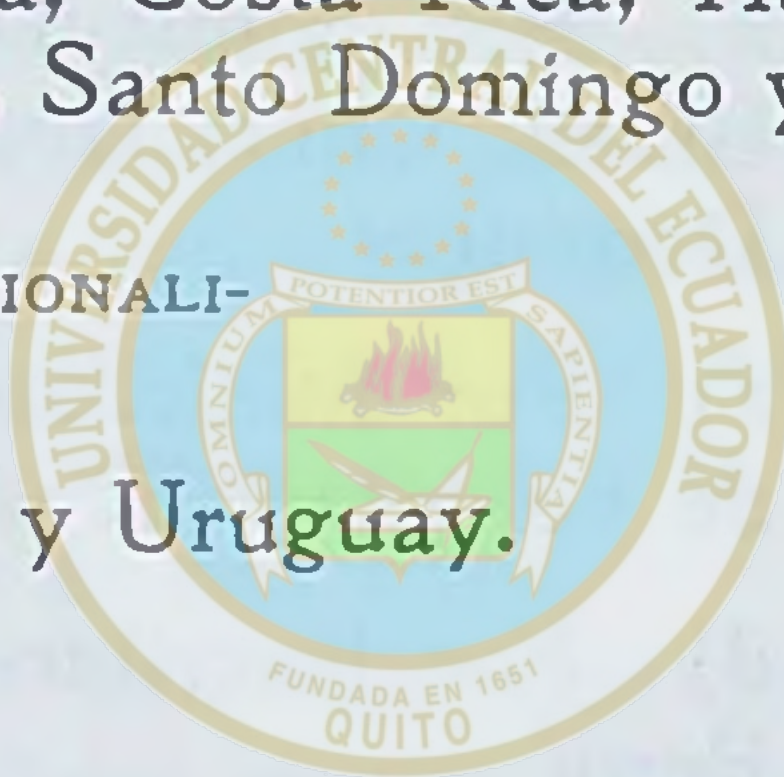
Brasil y El Salvador.

ATRIBUYEN A LA MUJER NACIONAL LA  
NACIONALIDAD DE SU ESPOSO EXTRAN-  
JERO:

Bolivia, Costa Rica, Haití, Méjico, Nica-  
ragua, Santo Domingo y Venezuela.

EL MARIDO ADQUIERE LA NACIONALI-  
LIDAD DE LA MUJER:

Brasil y Uruguay.



ÁREA HISTÓRICA

DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL

La nacionalidad en otras Legislaciones

## AFGHANISTAN

ESTATUTO DE LA MUJER CASADA:

La mujer sigue la nacionalidad del marido.

NATURALIZACION:

Se concede por carta, previo el requisito  
de cuatro años de residencia.

PERDIDA DE LA NACIONALIDAD:

Por naturalizarse en otro Estado.



## ALBANIA

## ESTATUTO DE LA MUJER:

La mujer extranjera que se casa con albanés adquiere esta nacionalidad y la mujer albanesa que se casa con extranjero pierde la suya, si es que puede adquirir la del marido.

## NATURALIZACION:

Se concede a las siguientes personas:

Al extranjero que reside en Albania durante cinco años.

Al extranjero que se ha casado con mujer albanesa, previa una residencia de tres años.

A cualquiera persona de origen albanés que tenga un año de residencia.

## PERDIDA:

La naturalización en otro país no quita a los albaneses su nacionalidad originaria, pero se la pierde de hecho por el servicio militar en un ejército extranjero.

## ALEMANIA

## ESTATUTO DE LA MUJER:

La mujer pierde su nacionalidad y adquiere la del marido.

## NATURALIZACION:

Se distingue el indigenato de la naturalización. El indigenato es la adquisición por un ciudadano alemán de la nacionalidad de un nuevo Estado y esta adquisición no entraña la pérdida de la nacionalidad del Estado en el cual el interesado tenía ante-



riormente su domicilio. La naturalización se refiere a los extranjeros en general y para ellos se necesita ser plenamente capaces, tener conducta irreprochable y un domicilio personal y medios de subsistencia.

#### PERDIDA:

Por adquisición de una nacionalidad extranjera.

Por el incumplimiento del servicio militar.

Por decisión de la autoridad.

Por el matrimonio con un extranjero.

## ARGENTINA

#### ESTATUTO DE LA MUJER:

Según la jurisprudencia, la mujer extranjera casada en Argentina tiene esta nacionalidad y la mujer argentina casada con extranjero es extranjera.

#### NATURALIZACION:

Está plenamente reconocida, correspondiendo a la autoridad judicial representada por los Jueces federales de sección, la facultad de otorgar la carta respectiva. Tocante a la mujer la jurisprudencia no ha sido fijada en forma definitiva. Tocante a los hijos menores siguen la condición del padre y si éste cambia de nacionalidad los hijos sufren igual cambio. Para los hijos emancipados se reconoce el derecho de cambiar de nacionalidad sin la intervención de la voluntad paterna.

#### PERDIDA:

Se opera por adquisición de una nacionalidad extranjera, por aceptación de cargos por cuenta de otra nación, por servicio militar en ejército extranjero.



## BELGICA

## ESTATUTO DE LA MUJER:

La mujer belga que se casa con extranjero o con un nacional que se hace naturalizar extranjero, sigue la nacionalidad del marido, siempre que las leyes de éste lo permitan. La mujer extranjera que se casa con belga adquiere la nacionalidad belga por naturalización. Si la mujer belga que ha perdido su nacionalidad no hace ninguna declaración, queda totalmente extranjera durante todo el matrimonio, pero si el matrimonio se disuelve por una causa cualquiera, la mujer podrá judicialmente recuperar su nacionalidad belga si ella está domiciliada por más de un año en Bélgica y si manifiesta este deseo por una declaración formal.

## NATURALIZACION:

Hay dos clases: la naturalización ordinaria y la gran naturalización. La ordinaria no confiere sino los derechos civiles; la gran naturalización confiere derechos políticos. Para la primera se necesita tener 20 años y una residencia de cinco años al menos. Para la gran naturalización se exige 25 años de edad y diez años de residencia en Bélgica.

La naturalización del padre o de la madre entraña la de los hijos menores, legítimos, no emancipados. La naturalización fraudulenta puede ser retirada.

## PERDIDA:

Se pierde por naturalizarse en el extranjero y así la pérdida de la nacionalidad belga del marido entraña igualmente la pérdida de la nacionalidad belga de la mujer. Se pierde también por adquirir de ple-



no derecho una nacionalidad extranjera. Los individuos que son investidos desde su nacimiento de una doble nacionalidad pueden renunciar la subordinación belga suscribiendo una declaración ante el oficial de estado civil del lugar de su nacimiento.

## BULGARIA

### ESTATUTO DE LA MUJER:

La extranjera que se casa con un búlgaro adquiere la nacionalidad búlgara y la mujer búlgara que se casa con un extranjero pierde su nacionalidad, pero no la pierde sino cuando adquiere por el matrimonio la nacionalidad de su marido.

### NATURALIZACION:

Para ésta se requiere mayoría de edad, diez años de residencia. El interesado debe dirigirse al Ministro de Justicia, probando su residencia continua y no interrumpida en Bulgaria. La naturalización se expide por el Poder Legislativo.

Los hijos menores cuyo padre o madre superviviente se hace naturalizar, se convierten en búlgaros y la naturalización del padre trae como consecuencia la de sus hijos menores que residan juntamente con él.

La naturalización del marido no entraña la de la mujer ni la de los hijos mayores.

### PERDIDA:

Se pierde por la naturalización en el extranjero; por la aceptación de funciones públicas conferidas por un Gobierno extraño, si es que el interesado no ha cesado en estas funciones en el plazo que se le ha señalado; por servicios prestados en



un ejército extranjero sin autorización del Gobierno; y la pierden, por fin, los búlgaros residentes en el extranjero que en tiempo de guerra no han respondido a la invitación de retorno.

## CHINA

### ESTATUTO DE LA MUJER:

La mujer china pierde su nacionalidad si se casa con un extranjero y si ella adquiere la nacionalidad de éste, pero en ningún caso la perderá sino cuando obtenga del Ministerio del Interior autorización para desligarse de sus vínculos de subordinación. La mujer extranjera que se casa con chino no se convierte en china sino cuando su ley nacional lo permite.

Al disolverse el matrimonio, la mujer china que se ha hecho extranjera no recobra su nacionalidad primitiva sino con autorización del Ministerio del Interior.

### ÁREA HISTÓRICA

### NATURALIZACION:

DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL

Se necesitan los siguientes requisitos: capacidad según la ley china y según la ley nacional del solicitante, cinco años de residencia ininterrumpida en China, conducta irreprochable y posesión de medios de existencia. La naturalización se transmite a la mujer y a los hijos si las leyes de estos últimos no se oponen a ello; pero el naturalizado durante diez años no podrá gozar de ningún derecho político ni ejercer funciones oficiales.

### PERDIDA:

Se pierde la nacionalidad china por naturalizarse en otro Estado con autorización del Gobierno, pero el chino así naturali-



zado puede reintegrarse a su nacionalidad tornando a China y obteniendo autorización oficial.

## DINAMARCA

### ESTATUTO DE LA MUJER:

La mujer extranjera que se casa con un danés adquiere la nacionalidad danesa y los hijos nacidos antes del matrimonio adquieren igualmente el indigenato si son menores de 18 años.

La mujer danesa que se casa con un súbdito extranjero pierde el indigenato danés si por el hecho de su matrimonio ella adquiere la nacionalidad del marido.

En caso de disolución del matrimonio la mujer para reintegrarse a su nacionalidad de origen necesita de naturalización.

### NATURALIZACION:

Se necesitan los siguientes requisitos: 18 años de edad, buena moralidad, conocimiento de la lengua danesa, cumplimiento de su servicio militar, prueba de la liberación de su anterior nacionalidad y residencia de 15 años en Dinamarca o de 10, si se trata de un súbdito sueco o noruego.

### PERDIDA:

Los daneses nacidos en el extranjero que no han estado jamás domiciliados en Dinamarca pierden en principio su indigenato danés. La mujer que ha perdido su indigenato en razón del matrimonio lo readquiere mediante una solicitud al Ministerio de lo Interior.



## ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

### ESTATUTO DE LA MUJER:

La mujer casada puede escoger libremente su patria y puede pedir y obtener su naturalización sin autorización del marido. Una ley de 22 de Setiembre de 1922 sancionó el principio de la independencia de la nacionalidad.

### NATURALIZACIÓN:

Se requieren los siguientes requisitos para obtenerla: que el extranjero haga conocer ante un tribunal especial su intención de colocarse bajo la protección de los Estados Unidos, residencia de cinco años en este territorio y de seis meses en el del Estado en el cual se ha presentado la petición, y juramento de defender la Constitución y leyes norteamericanas contra los enemigos interiores o exteriores.

### PERDIDA:

Se pierde la nacionalidad norteamericana en virtud de condena por deserción y por haberse aceptado cargos públicos conferidos por un Gobierno extranjero.

## FRANCIA

### ESTATUTO DE LA MUJER:

Cuando el matrimonio se ha celebrado en Francia, se admite por una ley de 1927 el principio de que la mujer conserva su nacionalidad francesa. Pero el mismo artículo admite que dicha mujer pierde su nacionalidad y toma el estatuto del marido, si antes de la celebración del matrimonio suscribe una declaración expresa compro-



bando además que de acuerdo con la legislación del país del marido la mujer toma esta nacionalidad.

Cuando el matrimonio se ha celebrado en el extranjero y si se trata de mujeres francesas, éstas siguen su nacionalidad si el primer domicilio de los esposos después de su matrimonio ha sido fijado en Francia.

#### NATURALIZACION:

Se necesita: tres años de residencia en Francia, plazo que puede reducirse a un año si el interesado se encuentra en uno de los siguientes casos: si ha prestado servicios importantes a Francia, si ha introducido en este territorio una industria o una invención útil o ha servido en los ejércitos franceses o aliados, o ha obtenido un diploma discernido por una Facultad francesa. La naturalización se otorga por Decreto previa proposición del Ministro de Justicia.

La naturalización tiene un efecto puramente personal, sin embargo, en ocasiones produce efectos colectivos definitivos que conciernen a los hijos menores, legítimos o naturales, ya residan juntamente con su padre o fuera del territorio francés.

La mujer y los hijos mayores quedan extranjeros, pero la naturalización puede aprovecharlos en el sentido de que ellos pueden, a su vez, naturalizarse sin justificar residencia.

#### PERDIDA:

Se ha presentado últimamente una innovación aparte de los casos ordinarios de pérdida, que consiste en permitir a los franceses de nacimiento poseer al mismo tiempo, sin manifestación de su voluntad, una nacionalidad extranjera, quedando autori-



zados a conservarla sólo en los casos en que ellos lo pidan expresamente.

## GRAN BRETAÑA

### ESTATUTO DE LA MUJER:

Por la ley de 7 de Agosto de 1914 se estableció que la mujer de un súbdito británico será considerada como británica, y la mujer de un extranjero, como extranjera.

La mujer extranjera que se casa con un súbdito británico obtiene, pues, esta nacionalidad de pleno derecho por efecto del matrimonio.

La mujer británica que se casa con extranjero pierde automáticamente su nacionalidad, por la sola razón del matrimonio.

### NATURALIZACION:

Para naturalizarse se debe haber residido al menos cinco años en el territorio del Reino Unido, pero durante el curso de los ocho que han precedido a su solicitud. Luego no es necesaria la residencia continua.

La mujer de un extranjero naturalizado británico se considera como inglesa porque la nacionalidad de la mujer debe ser la misma que la del marido.

En cuanto a los hijos, se distingue si son nacidos antes la naturalización o después. En el primer caso los hijos son mencionados en el certificado de la naturalización del padre; y en el segundo, son súbditos británicos en virtud de la ley de 1914.

### PERDIDA:

Se pierde: por revocación de la naturalización, por naturalización en el extranjero, teniendo cada uno de estos medios diversos



efectos jurídicos en lo que concierne a la mujer y a los hijos.

## ITALIA

### ESTATUTO DE LA MUJER:

Se afirma el principio de que una sola legislación debe gobernar la sociedad conyugal como un homenaje, se dice, a la unidad de la familia. Por lo mismo, la mujer extranjera que se casa con italiano, adquiere siempre esta nacionalidad y la conserva aún después de la disolución del matrimonio.

La mujer italiana que se casa con un extranjero pierde su nacionalidad siempre que por el hecho del matrimonio ella adquiera la del marido. Después de la disolución del matrimonio, puede recobrar su nacionalidad italiana si fuere a residir en el Reino.

### NATURALIZACION:

Se exigen como condiciones para obtener la nacionalidad italiana: la residencia de cinco años durante los cuales el postulante deberá haber efectivamente mantenido su estadía en Italia. Este plazo puede reducirse a tres años en lo que concierne a los extranjeros que se han casado con italianas o que han prestado servicios importantes a Italia.

Pueden ser igualmente naturalizados aquéllos que durante tres años al menos han servido al Estado de Italia y pueden hacerlo después de un año de residencia aquéllos que pudiendo tornar a ser italianos por el beneficio de la ley han omitido hacer en tiempo útil una declaración adquisitiva.



La mujer adquiere de pleno derecho la nacionalidad del marido y conserva su nacionalidad italiana aún después de la muerte del marido o de la separación de cuerpos. Los hijos menores no emancipados adquieren la nacionalidad italiana a consecuencia de la naturalización de sus padres.

#### PERDIDA:

Ningún italiano puede perder su nacionalidad sin el asentimiento del Gobierno, y éste último goza del poder más absoluto para apreciar si debe o no acordar ese asentimiento.

De este modo la necesidad de autorización es absoluta y se aplica a todos, hombres, mujeres o niños a los que la ley considere como italianos, aún cuando ellos residan en el extranjero y cualquiera que fuere el modo por el cual ellos adquirieron una nacionalidad extranjera.

ÁREA HISTÓRICA  
DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN INTEGRAL  
JAPON

#### ESTATUTO DE LA MUJER:

El matrimonio en esta legislación tiene una influencia muy particular. En efecto, no solamente la mujer extranjera que se casa con un japonés se hace japonesa por el hecho del matrimonio, sino que el extranjero que se casa con una japonesa madre de casa, también adquiere ipso-facto la nacionalidad de su mujer.

La mujer japonesa que se casa con un extranjero pierde su nacionalidad si la ley de su esposo le permite adquirir la nacionalidad de este último, pero después de la disolución del matrimonio ella puede recuperar su nacionalidad instalándose en el



Japón y obteniendo la autorización del Ministerio de Gobierno.

#### NATURALIZACION:

Se la concede a las personas que reúnen las condiciones siguientes: domicilio en el Japón durante cinco años consecutivos; edad de 20 años al menos, sin que esté privado de su capacidad jurídica por una medida de interdicción en su país de origen; que tenga buena moralidad; que posea bienes o que sea apto para ejercer una profesión que le asegure recursos suficientes; y que justifique que perderá ipso-facto su nacionalidad de origen adquiriendo la nacionalidad japonesa.

La mujer adquiere de pleno derecho la misma naturalización que el marido, excepto en los casos en que conserve en virtud de su ley nacional su propia subordinación. En lo que concierne a los hijos también adquieren la nacionalidad japonesa siempre que no existan estipulaciones contrarias en la ley de su propio país.

DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL

#### PERDIDA:

Se pierde la nacionalidad japonesa por dos razones principales: por la adquisición voluntaria de una nacionalidad extranjera y por la atribución de una nacionalidad extranjera por el hecho del nacimiento.

## RUSIA

#### ESTATUTO DE LA MUJER:

Jurídicamente, en la Unión Soviética el matrimonio no crea ningún derecho ni obligación con respecto a los dos esposos.

Ellos conservan toda la libertad física, moral y social de que ellos gozaban antes de



la unión. La mujer no está obligada a llevar el nombre de su marido ni a cohabitar con él. Ella puede tener un domicilio distinto y no está sometida a ningún deber de fidelidad. Por lo tanto, el matrimonio es impotente para modificar la nacionalidad de la mujer y ésta conserva su propia subordinación, a menos que ella desee expresamente quedar sometida a las leyes de su esposo, según lo declara el *Código de la familia*.

Estos principios han sido un tanto modificados por la ley de 13 de Junio de 1930. Conforme a ella se establece que cuando un ciudadano soviético contrae matrimonio con una persona de nacionalidad extranjera, los dos contratantes conservan cada uno su nacionalidad.

Las naturalizaciones soviéticas pueden efectuarse por un procedimiento sencillo: por decisión del Comité Ejecutivo Regional o de toda otra autoridad correspondiente si el interesado está domiciliado sobre el territorio de la U. R. S. S.; por decisión del Representante Plenipotenciario de la U. R. S. S., si el interesado está domiciliado en el extranjero.

En cuanto a la nacionalidad de los hijos se dispone que son considerados como de nacionalidad soviética siempre que uno de los padres posea esta cualidad al tiempo del nacimiento, sin tener para nada en cuenta el lugar del nacimiento del niño.

#### NATURALIZACION:

Para este aspecto no se necesita el requisito de ninguna residencia, ni se exige que sea asimilado al elemento ruso o que hable la lengua rusa. Pero si importa de preferencia que simpatice con el régimen comunista y que sea capaz de ayudar al desen-



volvimiento y al triunfo de la lucha de clases.

La ley de 30 de Junio de 1930 ha modificado el procedimiento de la naturalización, encomendando su otorgamiento al Comité Central Ejecutivo.

En lo que concierne a los postulantes domiciliados en el extranjero, las naturalizaciones se efectúan por intermedio de los Agentes diplomáticos.

La naturalización del marido no produce ningún efecto en lo que concierne a la mujer. Esta puede presentar su petición sin necesidad de la autorización del marido y en una palabra cada uno de los esposos puede ser naturalizado individualmente.

Si los esposos adquieren simultáneamente la nacionalidad soviética, los hijos menores de 14 años la adquieren igualmente. Si son hijos mayores de 14 años, pero que no han llegado aún a la mayor edad, tal como está reglada por la ley soviética, podrán adquirir esta nacionalidad al mismo tiempo que sus padres, pero será necesario su consentimiento, debiendo figurar en la solicitud que presenten sus padres.

Cuando uno solo de los padres ha sido naturalizado ciudadano soviético, importa poco que sea el marido o la mujer, los hijos mayores de 14 años adquieren no de pleno derecho la nacionalidad soviética, sino a consecuencia de la petición del padre que se hace naturalizar.

#### PERDIDA:

Se pierde la nacionalidad: a consecuencia de la adquisición de un vínculo extranjero y de renuncia a la nacionalidad soviética. Si los dos padres adquieren una nacionalidad extranjera, los hijos menores de 14 años pierden la nacionalidad soviética, pe-



ro la conservan en todos los casos y aún contra su voluntad, si son mayores de 14 años.

Si uno solo de los padres adquiere una nacionalidad extranjera, los hijos menores de 14 años que viven con él podrán adquirir igualmente la nacionalidad extranjera, bajo su demanda expresa, a condición que el otro padre que tenga la nacionalidad soviética haya muerto o haya perdido todo vínculo con sus hijos.

Se pierde además en virtud de las opciones suscritas a consecuencia de los acuerdos llevados a cabo con países extranjeros.

Como puede observarse de la ligera revisión que precede, los matices de las legislaciones, en cuanto a los aspectos de la nacionalidad, son infinitamente numerosos, sin que hubiéramos podido anotarlos y sistematizarlos en una forma más o menos completa, por la extensión que este trabajo debe tener. Un estudio más profundo de estos diversos aspectos puede realizarse recurriendo a la valiosa obra de E. Bourbousson (*Traité Générale De La Nationalité Dans Les Cinq Parties Du Monde*.—París 1931).

FIN DEL CAPÍTULO.